



Quinta Gira de Cooperación Técnica Sur-Sur

“Reintegración: Reconciliación y Desarrollo desde los Territorios”

Relatores:

**Daniel Pardo Calderón
Juan Diego Duque Salazar
Fundación Ideas para la Paz**

**Mayo, 2015
Bogotá D.C.**

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
I. CONTEXTO	6
<i>Joshua Mitrotti, Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR):</i>	6
II. DESARME Y DESMOVILIZACIÓN	6
<i>Brigadier General Mauricio Zúñiga, Director del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD). Ministerio de Defensa</i>	6
<i>Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA):</i>	7
III. REINTEGRACIÓN	8
<i>Joshua Mitrotti, Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR):</i>	8
<i>Visita a la Oficina Regional de la ACR, Eje cafetero</i>	13
TERRITORIALIDAD	14
<i>Esneyder Cortés, Director Programático de Reintegración de la ACR</i>	14
<i>Alejandro Gamboa, Director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC):</i>	15
<i>Iris Marín, Subdirectora General de reparación de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas (UARIV):</i>	15
<i>Valeria Saldarriaga, Directora técnica en la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial (UATC):</i>	15
<i>Mariana Escobar Arango, Subdirectora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS):</i>	16
<i>Álvaro Villarraga, Director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CMH):</i>	16
<i>Joshua Mitrotti, Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR):</i>	16
<i>Alcides Robles, Director de Gobierno y Asuntos Legislativos de la Federación Nacional de Departamentos</i>	17
<i>LuisAlberto Villegas, Director Ejecutivo de Vallenpaz:</i>	18
<i>María Patricia Giraldo, Alcaldesa del municipio de San Carlos, Antioquia:</i>	18
<i>Felipe Montoya, Asesor de paz de la Alcaldía de Cali:</i>	18
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES	20
<i>Esther Mwema Shimba, Oficina de comunicaciones de la Unidad de Implementación del programa de DDR en la República Democrática del Congo (RDC):</i>	20
<i>Cándida Parada, Procuradora Adjunta Defensa de la Familia, Mediación y Adopción, Procuraduría General de la República de El Salvador</i>	20

PRODUCTIVIDAD	21
<i>Carlos Castro, Coordinador de la Oficina Regional del Eje Cafetero (ACR):</i>	21
Eje de empleabilidad	21
<i>Lina María Álvarez, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI):</i>	21
<i>Juan Pablo Ortegón, Ejetexco (empresario):</i>	22
<i>Mónica Sánchez, UNIFORMAR (empresaria):</i>	22
<i>Natalia Salazar, Directora del Grupo de Relaciones Internacionales de la ACR</i>	22
Eje de emprendimiento	23
<i>Visita de campo a la Escuela Taller de Calzado y Confección:</i>	24
<i>Visitas de campo a fincas cafeteras en Anserma, Caldas y Santa Rosa de Cabal, Risaralda:</i>	24
RURALIDAD	25
<i>Esneyder Cortés , Director Programático de Reintegración de la ACR:</i>	25
<i>Alfonso Prada, Director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA):</i>	25
<i>Mónica de Greiff, Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB):</i>	25
<i>Lucas Uribe, Asesor de la Dirección Programática de Reintegración de la ACR:</i>	27
<i>Camilo Potes, Coordinador del Programa de DDR de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM):</i>	27
<i>Jorge Ballen, Fundador y Presidente del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (PANACA):</i>	28
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES	29
<i>Grevisse Ditend Yav, Director General del Programa Nacional de DDR de la República Democrática del Congo (RDC):</i>	29
<i>Yadaira Orsini, Programa de Asuntos Corporativos y Construcción de Paz de International Alert, United Kingdom:</i>	29
RECONCILIACIÓN	30
<i>Rocío Gutiérrez, Coordinadora de la Oficina Regional del Valle del Cauca (ACR):</i>	30
<i>Carolina Castillo, Coordinadora de la Oficina Regional de Caquetá (ACR):</i>	31
<i>León Valencia, Director Ejecutivo de la Fundación Paz y Reconciliación:</i>	31
<i>Carolina Suarez, Asesora de la Dirección de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV):</i>	32
<i>Marc De Beaufort, Creador y Productor de la campaña “Soy Capaz”:</i>	32
<i>Martha Izquierdo, Universidad Tecnológica de Pereira (UTP):</i>	33
<i>Brigadier General William Salamanca, Policía Nacional:</i>	34

EJERCICIO EFECTIVO DE LA CIUDADANÍA	35
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.....	35
<i>María Ofelia Navarrete, ex miembro de la guerrilla del Frente Nacional Farabundo (FMLN) Martí de El Salvador:.....</i>	<i>35</i>
<i>John Jairo Osorio, graduado del proceso de reintegración de la ACR:.....</i>	<i>35</i>
<i>Roberto Cañas, ex miembro de la guerrilla del Frente Nacional Farabundo Martí (FMLN) de El Salvador</i>	<i>36</i>
<i>Henry Robinson, ex miembro de la guerrilla del Ejército Republicano Irlandés (IRA):. 36</i>	
CONTRIBUCIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL A LA REINTEGRACIÓN	37
<i>Alejandro Gamboa, Director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC):</i>	<i>37</i>
<i>Peter Natiello, Director de la Misión de USAID en Colombia:</i>	<i>37</i>
<i>Marie Andersson de Frutos, Embajadora de Suecia en Colombia:</i>	<i>37</i>
<i>Joshua Mitrotti, Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR):</i>	<i>38</i>
<i>General (r) Óscar Naranjo, Ministro Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad:.....</i>	<i>38</i>
III. APRENDIZAJES, RETOS Y RECOMENDACIONES FINALES	39

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de fortalecer el proceso de reintegración en Colombia, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) ha realizado cuatro giras de cooperación técnica desde 2009, por medio de las cuales se ha buscado promover el intercambio de lecciones aprendidas, buenas prácticas y desafíos en materia de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) con países en situación de conflicto o postconflicto¹. Como resultado de estas iniciativas, enmarcadas en la Estrategia de Cooperación Sur-Sur del Estado, se ha obtenido un gran acervo de enseñanzas que a su vez han contribuido a transitar de una política asistencialista de reintegración a una de trabajo conjunto y con un carácter integral bajo esquemas que no solo involucran a los excombatientes individualmente, sino también a su entorno familiar y comunitario. Todo esto sobre la base de un enfoque de intervención diferencial y de responsabilidad compartida entre diferentes instituciones del Estado, el sector privado y la sociedad civil.

Bajo este contexto y para seguir avanzando en la consolidación de la política de reintegración, la ACR llevó a cabo la *Quinta Gira de Cooperación Sur-Sur, Reintegración: reconciliación y desarrollo desde los territorios*, en la región del Eje Cafetero, integrada por los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío entre el 20 y 25 de abril de 2015. El objetivo de esta quinta Gira consistió en compartir la experiencia del país en materia de reintegración resaltando los principales logros y su importancia como factor de transformación social, económica y cultural de las comunidades receptoras así como en la promoción de espacios de coexistencia, desarrollo, seguridad humana y reconciliación. La metodología empleada para cumplir este cometido incluyó sesiones teóricas con conferencias y conversatorios que permitieron ampliar los conocimientos de los participantes sobre la ruta de la reintegración en el país, acompañadas de sesiones interactivas de preguntas. Asimismo, incluyó visitas a terreno en las que los participantes conocieron de cerca el proceso e interactuaron con sus protagonistas.

En esta ocasión, la Gira contó con la presencia de delegaciones de 19 países de África, Asia, Europa, Norte América, Centro América y el Caribe, que conocieron la política de reintegración colombiana, sus fases y dimensiones, y al mismo tiempo aportaron desde su experiencia conocimientos y recomendaciones para la ACR.

A continuación se presenta una breve recopilación de los principales resultados de las diferentes actividades desarrolladas a lo largo de la Gira, resaltando por un lado, los logros alcanzados en 12 años de implementación de la política y sus aportes a la reconciliación y construcción de paz ante un eventual escenario de postconflicto en Colombia, y por otro, las inquietudes y recomendaciones hechas por los participantes internacionales.

¹ La primera gira se llevó a cabo en 2009 en Santa Marta y Barranquilla; la segunda tuvo lugar en 2010 en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y la zona cafetera; la tercera gira se desarrolló en 2012 en el departamento del Meta, y la cuarta se desarrolló en 2013 el departamento del Valle del Cauca.

I. CONTEXTO

Joshua Mitrotti, Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR): Aunque el proceso de DDR con los grupos paramilitares entre 2003 y 2006 ayudó a su desarticulación, ésta fue parcial dando origen al fenómeno de las bandas criminales, lo cual hizo pensar que la política de reintegración había fracasado. Las dificultades que surgieron y las fuertes críticas tanto a nivel interno como externo, llevaron a que el país replanteara su estrategia tomando como eje central la revisión de experiencias nacionales e internacionales en materia de DDR para identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas. Bajo esta lógica se llevó a cabo en 2009 el primer Congreso Internacional de DDR en Cartagena² y a partir de ahí un ciclo de giras de cooperación técnica que a lo largo de seis años han permitido el intercambio de conocimientos y experiencias sobre DDR con más de 135 técnicos, expertos y políticos de cerca de 40 países del todo el mundo.

Como resultado de esta nueva estrategia, se ha entendido mejor el problema y se ha diseñado una política más integral y articulada con las particularidades de los contextos y necesidades de las comunidades sobre la base del trabajo compartido y de la reconciliación como principios básicos para lograr romper los ciclos de violencia que alimentan el conflicto. Todo esto ha permitido que el país, luego de doce años, cuente con una institucionalidad en materia de DDR y construcción de paz lo suficientemente sólida para afrontar los desafíos venideros a propósito de la posibilidad de que se ponga fin al conflicto con las dos guerrillas más fuertes. Es ahí donde la quinta gira adquiere una connotación especial y por eso su objetivo principal consiste por un lado en revisar lo hecho hasta ahora y por otro, anticipar lo que podría ser un proceso más profundo e intenso de reintegración para lo cual es esencial abordar los ejes de trabajo de la ACR: **el territorio, la productividad, la ruralidad y la reconciliación.**

II. DESARME Y DESMOVILIZACIÓN

Brigadier General Mauricio Zúñiga, Director del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD). Ministerio de Defensa: El GAHD es liderado por el Ministerio de Defensa Nacional en articulación con la ACR. Entraña un acto de reconciliación entre el excombatiente que toma la decisión individual y voluntaria de salir del grupo armado y el soldado que lo recibe, lo auxilia y lo protege. A la fecha han participado en el proceso 29.000 desmovilizados (20.378 de FARC, 4.055 de ELN, 3.748 de AUC/individuales y 513 de disidencias) de los cuales el 93% se presentan a unidades del Ejército. Dentro de las principales razones de ingreso a los grupos armados ilegales están la intimidación, falta de oportunidades, gusto por la plata y la aventura, mientras que lo que motiva la salida es el incumplimiento de expectativas, el engaño, la violencia de género, la corrupción, el consumo de drogas, el ajusticiamiento, el cambio de ideología, la propaganda del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), entre otros. Muchos tardan en tomar la decisión de desmovilizarse por amenazas de los jefes, o por temores inducidos (ej. tortura, violación o “que los van a empujar del helicóptero”) y generalmente lo hacen luego del combate, cuando hay tropa cerca, en labores de inteligencia o cuando van al puesto de salud.

² Contribución de Cartagena para el DDR: <http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/La%20contribucion%20de%20Cartagena%20al%20Desarme,%20Desmovilizacion%20y%20Reintegracion.pdf>

El GAHD tiene el objetivo de arrebatar al grupo armado la mayor cantidad de combatientes y para eso se basa en una estrategia con dos pilares: incentivar la desmovilización y prevenir el reclutamiento ilícito. Cuando el excombatiente se entrega a una unidad militar o de Policía se le da transporte, alojamiento, alimentación y vestuario por 15 días en la unidad, se le entrega una identificación, atención en salud y psicosocial, asesoría jurídica, recreación, deporte y se le ayuda a encontrar a sus familiares si no sabe dónde están. Luego es llevado lejos de la zona de conflicto a “Hogares de Paz” semirurales, con alojamiento diferencial para solteros y para grupos familiares donde permanecen entre 2 y 3 meses (hay cinco hogares en todo el país). No están detenidos, el que quiera se va pero el que se queda cumple horarios y participa en actividades y capacitaciones. Tienen permisos familiares de 5 días y se les da \$7.500 diarios. Las familias gozan de los mismos beneficios.

En cuanto a la prevención del reclutamiento ilícito, el GAHD realiza conversatorios, actividades culturales, campañas lúdicas y deportivas con las que se ha buscado disminuir el riesgo de vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) a grupos armados ilegales.

Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA): Desde 2004, la Misión viene acompañando, monitoreando y verificando las políticas de construcción de paz del estado colombiano bajo los principios de autonomía, flexibilidad y respeto de las decisiones políticas colombianas. Primero participó en el traslado y la concentración temporal, el registro y destrucción de las armas, y la desmovilización de los grupos paramilitares (AUC), pero luego su mandato se fue ampliando a otra serie de tareas. Hoy la MAPP/OEA tiene una oficina central y 15 territoriales que acompañan la ley de víctimas, los procesos judiciales de la Ley de Justicia y Paz, hacen seguimiento a las condiciones carcelarias de los postulados de Justicia y Paz en 23 prisiones, monitorean los temas de seguridad, conflicto social y economías ilegales.

Colombia ha logrado crear un amplio capital de experiencia sobre el DDR con tres logros fundamentales: a) una gran cantidad de personas han dejado la ilegalidad (excombatientes), b) un número significativo de armas han salido de circulación y c) ha mejorado la capacidad de discusión y reflexión sobre políticas de construcción de paz.

Dentro de los principales retos que enfrenta el país en esta materia están: Definir un modelo de DDR para las FARC (simultáneo o gradual, por bloques, frentes o territorios, con entrega o dejación de armas); solucionar la situación jurídica, las garantías la seguridad y las de la familia del desmovilizado; brindar garantías territoriales con participación de las comunidades; diseñar un modelo de DDR para niños, niñas y adolescentes que impida su reclutamiento por estructuras criminales; dar un trato diferencial a los mandos medios, y finalmente, involucrar a la población de los territorios en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas de paz (de abajo hacia arriba).

Sesión de preguntas y respuestas: Se indagó acerca del impacto de la vocería política como incentivo para evitar la reincidencia, frente a lo cual se reconoció que en el caso de los paramilitares la ausencia de ese elemento propició cambios en reglas de juego que generaron desconfianza en el Estado. Con las guerrillas esto puede cambiar porque se buscará el tránsito hacia la política y por eso es crucial que el Estado cumpla con lo que se acuerde en La Habana.

La ACR es consciente de esto y si bien se ha avanzado en materia de DDR, eventualmente tendrán que darse ajustes de la política en ese nuevo contexto. Sobre esto se preguntó si se contemplan cambios del modelo para la reintegración de las FARC, y se dijo que dado que no es un sometimiento sino una negociación, se tendrá que esperar el resultado de los acuerdos. Sin embargo, ya hay una institucionalidad que funciona en los territorios en materia de empleabilidad, formación a la medida, convivencia y reconciliación que se amolda al contexto.

Se cuestionó también sobre los participantes del programa de reintegración (PPR's), por lo que se aclaró que no fue diseñado exclusivamente para paramilitares sino que se trata de una política dirigida a ayudar a la población que solo ha tenido como referente la violencia (pandillas, barras, presos e incluso desertores), a construir un proyecto de vida sostenible sin el uso de armas, a que se organicen, ejerzan y respeten la democracia. Surgió igualmente una inquietud sobre el involucramiento del sector privado en el proceso de reintegración, pero según se dijo, hay avances con el empresariado que se reflejan en 24.000 PPR empleados y en mecanismos funcionales como la empleabilidad y la formación a la medida.

Otra variable por la que se preguntó fue la seguridad. En este caso se aseguró que es un factor fundamental para garantizar el éxito y la sostenibilidad de la política a largo plazo. La ACR ha aprendido a detectar casos de amenazas a desmovilizados y a preservar su vida, pero también actúa a partir de los contextos que aunque pueden ser muy difíciles no quiere decir que no se intervengan. Un ejemplo es lo sucedido en Caquetá, donde varios desmovilizados han logrado hacer un proyecto de vida a pesar de la presencia de grupos ilegales.

Adicionalmente se preguntó qué estrategias se emplean para lograr que los excombatientes se reintegren a la sociedad, si es posible hablar de una guerra civil en el país y si es conveniente otorgar amnistías. Sobre lo primero se señaló que desde el GAHD, por ejemplo, se busca arrebatar a los grupos ilegales la mayor cantidad posible de personas y eso se hace a través de atención primaria, refugio, ropa y comida. En cuanto a la existencia de una guerra civil se dijo que más allá del calificativo lo que importa es dar una lectura acertada al impacto de la violencia, priorizando y focalizando la atención para construir paz.

Frente a las amnistías se aseguró que no es adecuado su otorgamiento y que el país ha venido actuando en un marco de Justicia Transicional que no da lugar para medidas de perdón y olvido. Finalmente se preguntó cómo pueden incluirse elementos diferenciales en la fase de desarme y desmovilización para orientar mejor la atención a quienes se reintegran, sobre lo cual se señaló que si bien no hay experiencias de procesos de desarme y desmovilización con enfoques diferenciales, la ACR sí viene trabajando en guías de reintegración en las primeras fases del DDR. También se afirmó que es esencial aprovechar la visión de desmovilizados, indígenas, mujeres afro, adultos mayores, niños y niñas para involucrarlos y darles participación en el diseño e implementación de los programas.

III. REINTEGRACIÓN

Joshua Mitrotti, Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR): A lo largo de los últimos treinta años en Colombia se han desarrollado varios procesos de reintegración, algunos exitosos otros no:

Año	Evolución de la reintegración en Colombia
1991	Se llevaron a cabo varias negociaciones con las guerrillas del M-19, el Quintín Lame, el Ejército de Liberación Popular (EPL) y otros grupos que terminaron con su total desarme y desmovilización. Se creó el Programa Presidencial para la Reinserción encargado de orientar la reincorporación de los excombatientes. Estos fueron procesos de corto plazo, centralizados en Bogotá, con tercerización en la prestación de servicios sociales y con entrega de proyectos productivos pero con un fuerte componente de participación en política. De hecho, fueron procesos exitosos desde el punto de vista de la reintegración política.
2003	El gobierno cometió el error de crear una nueva institucionalidad sin tener en cuenta lo aprendido hasta entonces, de ahí la necesidad de evitar que los funcionarios sean los dueños del aprendizaje y de documentar las lecciones, los errores y aciertos para empezar a trabajar sobre esto. En esa oportunidad, a partir de lo que se estaba acordando con los grupos paramilitares se creó en el Ministerio del Interior, un programa de reintegración con muy bajo perfil (PRVC). No era una instancia máxima de política y aunque si se contempló el involucramiento del sector privado, fue de corto plazo, se pagaba un estipendio mensual de 18-24 meses y se entregaba un proyecto productivo para proyectos colectivos, lo cual no funcionó bien. La atención estaba centralizada en Bogotá con muchas dificultades y se incluyeron dos modalidades de desarme y desmovilización: una individual y otra colectiva. Se empieza a crear un primer modelo de sistema de información que hoy se aplica (SAME).
2006	Se crea la Alta Consejería para la Reintegración en cabeza de la Presidencia tomando como referente el programa de paz y reconciliación de Medellín que se centraba en pandillas y combos y que sirvió para atender la desmovilización de un bloque paramilitar. Se empezó a diseñar una política desde una perspectiva criminológica con atención psicosocial, con programas de inserción laboral y proyectos productivos, se rompió con los límites temporales y se optó por un enfoque de largo plazo más orientado al individuo, a su familia y a la comunidad. Se crearon 26 centros de servicios a nivel nacional. Se empezó a configurar un andamiaje jurídico e institucional a partir de la Ley 975 de 2005 (de Justicia y Paz) y con unos CONPES para fortalecer la institucionalidad que ya existía y no crear una nueva.
2010	La política de reintegración se mantiene y la Alta Consejería, que tenía poca autonomía, se convierte en Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) con capacidad técnica, autonomía política y financiera pero dependiente de la Presidencia. Se generó mayor articulación con la política de desarme y desmovilización con un enfoque más humano buscando crear capacidades en los individuos que estuvieron en la guerra. Se enfatizó en la atención integral y en la inclusión del tema de la reconciliación. La inexistencia de plazos premiaba conductas no responsables por lo que se puso un límite máximo de 6,5 años para culminar el proceso, con reglas claras y una lógica multidimensional para que al final produjera ciudadanos íntegros con derechos y deberes. Se planteó la necesidad de que los desmovilizados tuvieran un plan de vida que se revisara y se actualizara. Se trata de un programa voluntario centrado en el individuo, su familia y su entorno. Hoy se cuenta con 32 centros de servicios en todo el país aunque se debe reconocer que hay varios marcos jurídicos que han generado cierta inestabilidad.

Durante ocho años se ha venido “construyendo sobre lo construido”, una estrategia de reintegración que deja como resultado una gran capacidad técnica y un gran capital humano. Hoy la política de reintegración no es concebida como una tarea exclusiva del gobierno nacional sino como el resultado de la articulación con los gobiernos locales, otras instituciones del Estado, el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Desde 2003 se han desmovilizado cerca de 57.000 combatientes: 25.267 individualmente y 32.000 colectivamente, se calcula que en 860 municipios distribuidos en los 32 departamentos del país hay población desmovilizada. La política de reintegración está incluida en 147 planes de desarrollo municipales y departamentales. El 84% de los desmovilizados se han acogido a la ruta de la reintegración (48.000) y 10.000 no lo han hecho, en su mayoría mandos medios y reincidentes. Mientras que 9.000 han culminado la ruta exitosamente, 22.000 están en proceso, 10.000 están investigados para pérdida de beneficios, y 6.727 salieron del proceso. El 51% de la población en proceso de reintegración se concentra en 20 municipios del país de los cuales 16 son capitales.

Balance de la ruta de la reintegración por dimensión:

Dimensión	Aprendizajes	¿Qué se ha hecho?	¿Qué se tiene hoy?
Individuo	<ul style="list-style-type: none"> • La mayoría tienen afectaciones psicológicas por eso se ha desarrollado una ruta de atención mental con el Ministerio de Salud y se está trabajando en articulación para esto. • Acompañamiento cercano para generar confianza en la institucionalidad. • Cumplir compromisos es un derrotero para garantizar el éxito de la política. • Generar una nueva relación entre individuo y sociedad que redunde en mejoramiento de calidad de vida de estas personas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo de salud mental para estabilización emocional. • Se creó la figura de reintegrador con acompañamiento personalizado (40 personas a su cargo en promedio). • Se ha trabajado en varias alternativas lúdicas a través del arte y los deportes para evitar reclutamiento y prevención de ciclos de la violencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Superación de afectaciones emocionales de 24.000 personas, 6.091 han consolidado competencias interpersonales, especialmente a nivel de identidad y 5.600 con competencias intergrupales. • Reducción de alertas emocionales: depresión, estrés post traumático y ansiedad. • Se ha ido desarrollando la figura del profesional reintegrador 3: clínico que ayuda a la estabilización emocional. • Más vínculos con diferentes actores para fortalecer proceso de atención psicosocial (Ministerio de Salud).
Familia	<ul style="list-style-type: none"> • La familia tiene una alta incidencia en el éxito y el fracaso del proceso de reintegración. • Uno de los principales retos es romper con la violencia intrafamiliar (machismo y atención a mujeres). • Es necesario trabajar con los niños más que con los adultos para romper círculos de violencia (programa "Mambrú no va a la guerra" que ayuda a reducir probabilidad de reclutamiento). • Reintegración no solo con individuos sino con familias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar capacidades en las personas en proceso de reintegración y sus familias para crear un entorno protector que ayude a la convivencia y a la protección de los derechos y deberes de las familias. • Caracterización de las familias. • Se ha desarrollado un modelo de atención a casos de violencia intrafamiliar para excombatientes. • Se han desarrollado herramientas para fortalecer el papel de la familia como eje de la sociedad. • Se ha trabajado en el último año con 7.300 familias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vínculos estrechos con entidades que trabajan el tema de la familia como el ICBF, comisarías de familia y entidades territoriales, para promover la resolución pacífica de conflictos.
Educación	<ul style="list-style-type: none"> • Participación en el conflicto armado genera analfabetismo. • Es necesario el desarrollo de un modelo particular de educación para adultos. • Reintegración requiere corresponsabilidad de sector público para acceso a todos los niveles de educación con altos estándares de calidad y pertinencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de un modelo avalado por el Ministerio de Educación que complementa los esquemas de alfabetización del Estado para adultos, pero también para población vulnerable en contextos de violencia (excombatientes, víctimas, comunidades receptoras y jóvenes). • Acompañamiento de institucionalidad pública en todos los niveles administrativos. 	<ul style="list-style-type: none"> • 82.4% personas en proceso de reintegración que han superado analfabetismo. • 21.000 aprobaron la básica primaria. • 8.000 aprobaron la secundaria. • 13.000 son bachilleres. • 2.000 han accedido a educación superior. • 500 son profesionales que contribuyen a la paz.
Productividad	<ul style="list-style-type: none"> • Se debe entender el trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> • Acompañamiento profundo 	<ul style="list-style-type: none"> • 22.000 personas en proceso de

	<p>como una oportunidad para desarrollar un proyecto de vida sostenible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de ingresos depende del contexto y del desarrollo económico de las regiones. • Generar desarrollo en el territorio. La apuesta es que la reintegración no sea una carga sino que apalanque el desarrollo humano en el territorio. • Cooperación internacional y sector público han sido claves en este componente. • Proyecto productivo debe ser resultado final del proceso cuando hay habilidades y competencias. • Transformar imaginario de que todos son emprendedores. La mayoría está preparados es para ser empleados. 	<p>en los territorios al tema de la empleabilidad y unidades de negocio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trabajo con el SENA ha sido clave para mejorar capacidades de individuos y sus familias para la generación de ingresos sostenibles dentro de la legalidad. • Se ha mejorado la oferta del SENA y se ha adecuado más a los contextos y actividades económicas de los territorios. • Ayudas económicas han aumentado de 2 a 5 millones de pesos en algunos casos, lo cual ha ayudado a impulsar varios emprendimientos. • Generación de esquemas para cubrir necesidades distintas a las establecidas en el programa, como educación y vivienda. 	<p>reintegración están trabajando.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9.000 son trabajadores formales en la pequeña y mediana industria. • Se ha avanzado bastante en la vinculación de sector privado, pero aún hace falta.
Ciudadanía	<ul style="list-style-type: none"> • La reintegración debe ser un proceso que llegue a comunidades vulnerables. • Acercarse a las autoridades locales para romper los círculos de violencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha desarrollado un enfoque que articula un horizonte de reconciliación y un horizonte de garantías de no repetición enmarcado en un modelo de Justicia Transicional. • Enfoque de reintegración comunitaria buscando el empoderamiento de la ciudadanía para romper círculos de violencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • 110 municipios intervenidos, 94% de personas en proceso de reintegración. • 18.000 ciudadanos capacitados en participación y construcción de ciudadanía. • 63 intervenciones de "Mambrú no va a la guerra" en 33 municipios. • Nuevo enfoque de servicio social ha permitido que cerca de 24.000 personas contribuyan con por lo menos 80 horas de servicio social en comunidades vulnerables.
Habitabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Arraigo al territorio va más allá de tener acceso a la vivienda. • Acompañamiento constante en lugares de asentamiento para evitar reincidencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entender la habitabilidad como eje de la política de reintegración. • Promover formalidad laboral para acceder a planes de financiamiento de vivienda. 	<ul style="list-style-type: none"> • 28.329 personas en proceso de reintegración censadas para conocer situación de habitabilidad. • 1.500 personas en proceso de reintegración vinculadas a planes de ahorro voluntario en el marco de alianza entre ACR y el Fondo Nacional del Ahorro.
Salud	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento de afectaciones físicas y mentales por participación en el conflicto. • Articulación con el sistema de salud y atención diferencial. • Promoción y prevención en salud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de modelo de acompañamiento con el sector salud y de seguridad social. • Diseño de proyecto para atención de personas en proceso de reintegración en situación de discapacidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • 342 personas en proceso de reintegración reciben atención diferencial y focalizada. • 90% de personas en proceso de reintegración afiliadas al sistema general de seguridad social. • Reducción de barreras de acceso al sistema de salud.
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Ingreso a la ruta de 	<ul style="list-style-type: none"> • Articulación con la Agencia 	<ul style="list-style-type: none"> • Se calculó que el nivel de

	<p>reintegración reduce riesgo de asesinato de personas desmovilizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de compromisos genera confianza en las personas en proceso de reintegración y esto redundará en mayores niveles de denuncia. • El costo de mantener un preso en el sistema penitenciario es tres veces mayor (USD 8.000/persona/año) que el costo del proceso de reintegración de un desmovilizado (USD 2.500/persona/año). 	<p>Nacional de Protección (ANP) para evaluación y prevención del riesgo de personas en proceso de reintegración.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Financiamiento del traslado de municipio cuando el riesgo de seguridad es alto. • Empoderamiento de las personas en proceso de reintegración para la prevención del riesgo a través de charlas informativas. 	<p>reincidencia de personas que pasan por el proceso de reintegración es del 26%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se calculó que el nivel de reincidencia de personas desmovilizadas es de 24%. • Rompimiento de estigmas en territorios: hay algunos desmovilizados que cometen delitos pero no son todos. 76% de ingresados están en la legalidad y solo 24% han reincidido.
<p>Post monitoreo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener acompañamiento a proyectos de vida de personas que han culminado el proceso de reintegración. • Mantener vínculo entre ACR y personas que han culminado el proceso genera arraigo con la legalidad y confianza en las instituciones. • Conocer impacto del proceso en personas que lo han culminado ayuda a hacer ajustes para mejorarlo. • Sistema de información permite hacer seguimiento completo de todo el proceso individualizado con control interno para evitar factores de riesgo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la situación económica, social y legal de las personas que culminan el proceso de reintegración. • Aplicar mecanismos de recolección de información cualitativa y cuantitativa de personas que han culminado el proceso de reintegración. 	<ul style="list-style-type: none"> • 90% de las personas que han culminado el proceso, han aceptado el post monitoreo. • 97% de estas personas están afiliadas al sistema general de seguridad social. • 80% de estas personas están trabajando. • Ningún presenta condenas por delitos cometidos después de terminar el proceso.

Sesión de preguntas y respuestas: Se indagó sobre la financiación del programa de reintegración. Sobre esto se dijo que en los últimos 12 años ha costado cerca de USD 650 millones, de los cuales 93% han sido recursos de la nación (Presupuesto General) y el 7% recursos de cooperación internacional. Ante una pregunta sobre la experiencia con las comunidades receptoras, se señaló que en algunos casos es más fácil trabajar individualmente con las víctimas, victimarios y población vulnerable que con los líderes que los representan; que aunque las intervenciones comunitarias son de corto plazo debido a restricciones presupuestales, ayudan a crear escenarios de convivencia y paz, y que el papel de la Unión Europea ha sido fundamental con un aporte de cerca de 7.7 millones de euros para este componente de 2007 a 2012.

Otra pregunta tuvo que ver con el abordaje en la política de reintegración de los problemas estructurales del país, frente a lo cual se dijo que uno de sus principales focos es transformar condiciones históricas en los territorios por medio de la ampliación de la oferta pública de servicios para el mejoramiento de la calidad de vida de los excombatientes, de sus familias y sus comunidades. También surgió una inquietud sobre la metodología de monitoreo y evaluación. Frente a esto se explicó que luego a partir de algunas experiencias de reconciliación, se identificaron alternativas para que el acompañamiento sea gradual, se eviten presiones y se genere empoderamiento. Además se cuenta con mecanismos de intercambio de información con otras entidades que permiten dar cuenta del éxito de la ruta.

Visita a la Oficina Regional de la ACR, Eje cafetero³ (1.074 personas atendidas: 775 en proceso de reintegración y 299 que han culminado el proceso): Los asistentes pudieron conocer de cerca el esquema de atención y seguimiento de las personas en proceso de reintegración⁴, el cual contempla un componente de recepción, socialización de la ruta de reintegración, verificación de documentos (identificación, antecedentes y afiliaciones), registro y remisión a los profesionales reintegradores. El equipo encargado de estas labores también atiende las solicitudes de la ciudadanía, a las personas en proceso de reintegración y a otras entidades del Estado (por canales escritos, virtuales, presenciales y telefónicos). El esquema además incluye un componente de asesoría jurídica con relación a los marcos normativos que rigen el proceso de reintegración tanto para guerrilleros (Ley 418/97) como para paramilitares (Ley 975/05, Ley 1224/10), y la verificación de los requisitos para acceder a los beneficios legales. Superadas estas etapas se procede a concertar con el desmovilizado un plan de trabajo con logros, metas, acciones e indicadores y con tiempos para desarrollo y verificación por cada dimensión de la ruta de reintegración, todo en función de los intereses y necesidades de cada desmovilizado.

Al final de la sesión, el equipo del grupo territorial presentó a la promotora de reintegración, que es una excombatiente que ha culminado el proceso de reintegración y trabaja en la ACR. El rol de la promotora es crear un puente de comunicación entre los desmovilizados que llegan y la ACR, generar vínculos de confianza, acompañar el proceso y apoyar a los profesionales para que los que están inactivos o próximos a perder beneficios regresen al grupo territorial. La promotora manifestó que esto le ha permitido cambiar la visión de la ACR. Al principio pensaba que los profesionales hacían su trabajo por un ingreso, pero hoy se da cuenta que hay un compromiso más allá del simple ingreso que ellos reciben por trabajar en la ACR.

Sesión de preguntas y respuestas: Se preguntó por la forma en cómo los desmovilizados son recibidos por las comunidades y si el grupo armado al que pertenecían intenta bloquear su ingreso al programa, sobre lo cual se dijo que si bien al principio el retorno es difícil porque hay rechazo y estigmatización, poco a poco cuando el desmovilizado demuestra que puede ayudar a la comunidad y con el acompañamiento de la institucionalidad, las percepciones mejoran y aumenta la aceptación. Igualmente, ante una inquietud sobre si la ACR tiene facultades para otorgar algún tipo de perdón por delitos cometidos por los desmovilizados se dijo que no, que la ACR solo hace acompañamiento a los juicios y que las entidades encargadas de decidir son la Fiscalía, los jueces y las Cortes. Sobre esto se aclaró que los jueces están obligados a suspender la pena solo si el desmovilizado cumple con los requisitos. El juez puede revocar el beneficio de la suspensión y condenar con pena de prisión o dar un plazo si no se han cumplido los requisitos necesarios para aplicar la suspensión de la pena. Adicionalmente, se agregó que los desmovilizados que no fueron postulados por Justicia y Paz (975/05) y no aplican para la Ley 1424 son personas que serán juzgadas por justicia ordinaria y no tendrían ningún beneficio jurídico.

Se preguntó además si la atención psicosocial se extiende a otras personas diferentes a los victimarios, por lo que se aclaró que la población objeto del programa son desmovilizados y que es la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) la encargada de brindar

³ Conformado por un coordinador, 1 oficial administrativo, 1 profesional en tecnología, 3 técnicos de archivo, 1 asistente de información, 2 asesores jurídicos, 1 asesor de ruta, 2 reintegradores clínicos, 16 reintegradores y 2 promotores de reintegración, 2 asesores de corresponsabilidad. El número de funcionarios depende de tamaño de población desmovilizada en la región.

⁴ La población atendida en el Eje cafetero se caracteriza porque en su mayoría tienen entre 26 y 50 años, el 63% están en la legalidad, el 61% son desmovilizados individuales de grupos guerrilleros y el 41% es población rural.

atención especializada a población vulnerable afectada por el conflicto. Con relación a este tema también se preguntó por el tratamiento de los traumas psicológicos y si hay universidades que formen profesionales psicólogos sobre la atención de traumas profundos. Sobre lo primero se dijo que en 2011 se introdujo la figura del reintegrador clínico encargado de identificar estas afecciones en los primeros meses. Si el caso supera las capacidades del reintegrador, la ACR lo remite al sistema de salud para que lo atienda. Sobre el segundo aspecto se precisó que la ACR y el Colegio Colombiano de Psicólogos están diseñando un perfil de psicólogo clínico para que con las Universidades se pueda empezar a formar profesionales con estas competencias. Se reconoció que este es un reto para el postconflicto.

Surgieron además inquietudes sobre la duración del programa y el costo total per cápita del proceso, y sobre los retos de los profesionales para la reintegración. Frente a los costos se dijo que la ruta dura en promedio 6.5 años aunque puede variar de acuerdo al plan de trabajo, y que el costo persona/año es de aproximadamente USD 2.500. Sobre los desafíos se insistió en crear espacios de encuentro para que los excombatientes sean aceptados por las comunidades. Generar espacios de reconciliación no es fácil porque las comunidades todavía son muy reacias a conversar sobre esto. Lo que se hace es, por ejemplo, crear espacios productivos como el “taller-escuela de calzado” en el que participan víctimas, excombatientes y comunidades vulnerables. En estos lugares donde los actores reconocen que las personas en proceso de reintegración son seres humanos con un gran potencial y que también tienen oportunidades.

TERRITORIALIDAD

Esneyder Cortés, Director Programático de Reintegración de la ACR: Para la agencia, el concepto de territorio va más allá del espacio físico y comprende temas como cultura, aspectos económicos, aspectos sociales y el ejercicio real de la ciudadanía, factores que interactúan y condicionan las posibilidades de la reintegración. Hoy la ACR hace presencia en 160 municipios a través de 32 grupos territoriales que trabajan de la mano con las instituciones, la comunidad local, el sector privado y en espacios como los comités de justicia transicional, para definir el proceso de reintegración a nivel local. No todas las regiones son iguales. Algunas como el Eje Cafetero tienen estándares de vida altos mientras que zonas al sur del país, como Putumayo, tienen serios problemas de violencia, criminalidad y pobreza. Esto hace que la reintegración sea muy distinta.

Para responder mejor a las particularidades de los contextos, la Agencia ha venido trabajando en la inclusión de la reintegración en los planes de desarrollo municipales como herramientas de gestión pública. Gracias al trabajo de los grupos territoriales, hoy se tienen 29 planes de desarrollo que incluye el tema de reintegración. Sin embargo, esta articulación no es fácil porque persiste la estigmatización hacia los excombatientes.

Algunas de las principales estrategias de la Agencia para superar estas dificultades a nivel territorial son: un modelo de educación para adultos que ha permitido generar espacios de encuentro entre población vulnerable y los excombatientes, generando un cambio de imaginarios sobre los PPR's; formación para el trabajo; intervenciones comunitarias (118 en 110 municipios) a partir de necesidades y con participación de los excombatientes; acciones para la prevención de reclutamiento (33 intervenciones) como una forma para mitigar los riesgos sobre niños, niñas y jóvenes que pueden estar en la mira de estructuras ilegales, y acciones de servicio social por parte de los excombatientes (en 550 municipios) para colaborar en problemáticas de las comunidades. Estas acciones dan cuenta de la voluntad del desmovilizado para reintegrarse a la vida civil.

En suma, es importante decir que este trabajo se da bajo enfoques y principios, más no en métodos y procedimientos concretos. Los territorios se comportan de manera distinta y la política de reintegración tiene que ser flexible para ser funcional a las condiciones de los territorios.

Articulación institucional para la construcción de la paz

Alejandro Gamboa, Director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC): La APC viene trabajando de la mano con la ACR en estrategias para el intercambio de conocimientos y en la gestión y canalización de recursos para el proceso de reintegración. Esta labor se ha enmarcado entres prioridades: (i) construcción de paz a través del espacio de coordinación G8⁵ en el que la agencia se encarga de gestionar recursos de donantes tradicionales y no tradicionales, y de maximizar esa ayuda para responder eficazmente a necesidades puntuales, (ii) canalización de recursos de los donantes hacia la promoción del desarrollo rural sostenible reconociendo que el conflicto tiene un origen rural con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del campo y (iii) el redescubrimiento del territorio y sus potencialidades en un escenario de postconflicto.

Iris Marín, Subdirectora General de reparación de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas (UARIV): La Unidad hace parte de la iniciativa “juntos construimos paz”, un grupo de ocho entidades que vienen liderando esfuerzos para consolidar la paz desde los territorios. La Unidad fue creada legalmente con la Ley 1448 de 2011, que aunque fue aprobada antes del inicio del proceso de negociación con las FARC, demuestra que las víctimas son eje central para la construcción de paz independiente de la coyuntura política y que su atención y reparación es una obligación del Estado.

La Unidad coordina un sistema institucional de 45 entidades del gobierno nacional con el que se busca atender los derechos sociales, civiles y económicos de las víctimas. Este trabajo ha permitido consolidar un registro único que contabiliza más de siete millones de víctimas de las cuales 5.5 son sujetos de atención actualmente. Sin embargo, solo se ha cubierto con el programa al 10% de las víctimas registradas por lo que es fundamental que las políticas macroeconómicas tengan en cuenta el tema de la atención y reparación. Adicionalmente, la Unidad ha desarrollado un programa de reparaciones colectivas del que se han beneficiado cerca de 300 comunidades de campesinos, grupos étnicos, organizaciones de mujeres, sindicatos y otros grupos colectivos.

Valeria Saldarriaga, Directora técnica en la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial (UATC): La Unidad surgió por la necesidad para llevar el Estado social de Derecho a los territorios que ya no tienen presencia de actores armados. Bajo esta premisa se diseñó una política para la reconstrucción territorial en la que el Estado debía llegar de manera articulada y organizada. Hoy, la Unidad hace presencia en 58 municipios donde trabaja con las comunidades en la definición de los programas de acción regional para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

⁵ Instancia de coordinación interinstitucional que reúne a todas las entidades con incidencia directa en la construcción de Paz: la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial (UACT), la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC), la Agencia Colombiana para la Reintegración y el Ministerio para el Postconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad.

La evolución de la entidad ha permitido también un cambio en el lenguaje. Hoy ya no se habla de consolidación sino de reconstrucción del territorio. Bajo este cambio se ha creado un programa de respuesta rápida del que se desprenden varias lecciones. Una de ellas es que la atención rápida con proyectos de infraestructura en el que las comunidades participan en el diseño y ejecución, contribuye a reconstruir confianza entre los actores del territorio. Hoy en día, el programa se está preparando para que en el momento cero de la firma de los acuerdos de La Habana, este llegue a todos los municipios que se focalicen, así empezar un trabajo de construcción de confianza.

Mariana Escobar Arango, Subdirectora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS): El Departamento de Prosperidad Social actúa como un ministerio de inclusión social, que atiende a población vulnerable en cinco aspectos básicos: nutrición, desarrollo de ingresos, inclusión financiera, habitabilidad e infraestructura social y comunitaria. En el marco del G8 se ha buscado la articulación entre instituciones desde el nivel nacional y el nivel local de gobierno. Si bien puede haber articulación a nivel nacional, a nivel local sigue siendo muy difícil la aplicación de las políticas ya que sus dinámicas son distintas y esto complejiza los procesos. Hoy en día los niveles locales no poseen las herramientas y recursos suficientes para solucionar sus problemas.

Escobar resaltó la experiencia que vivió Colombia con los programas de paz y desarrollo que fue una iniciativa de la sociedad civil que construyó una propuesta de abajo hacia arriba sobre el desarrollo, y que después de 25 años deja importantes enseñanzas. Este puede ser un modelo orientador sobre la articulación entre los actores, la ampliación de la participación y la construcción de una política desde abajo.

Álvaro Villarraga, Director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CMH): El CMH hace parte de la institucionalidad de la ley 1448 de 2011 y su labor consiste en promover acciones de memoria histórica, contribuir a los esfuerzos de memoria de la sociedad, de las autoridades y de las instituciones. De ahí que sus informes y hechos simbólicos sean el producto de alianzas y convenios. Dentro de las principales iniciativas lideradas por el CMH para promover la memoria histórica se destacan: la construcción de un museo nacional de la memoria y de un archivo nacional de Derechos Humanos; brindar acompañamiento a los desmovilizados en la construcción de ejercicios de memoria a través de herramientas como los “acuerdos para la verdad”; promover la coordinación entre entidades municipales y departamentales en la construcción de memoria (estrategia nación-territorio), y diversificar las formas de producción de memoria histórica.

Se pueden distinguir al menos cinco puntos de cruce entre la memoria y la reintegración: (i) coordinación institucional estrecha en el marco de iniciativas como el G8; (ii) la aplicación de la Ley 1424 que volvió exigible la contribución a la memoria en el proceso de reintegración para la obtención de beneficios penales (libertad condicionada si participa en acuerdos para la verdad); (iii) la inclusión de la reintegración en la agenda de memoria histórica (ej. El capítulo del informe “¡Basta ya!”); (iv) orientación del trabajo del CMH hacia la construcción de paz en lo referente a la reintegración y la Justicia Transicional de cara a un posible acuerdo de paz con las FARC y el ELN; (v) focalización y acompañamiento en los territorios donde se prevén dinámicas de memoria en un contexto de postconflicto y participación activa en una eventual comisión de la verdad.

Joshua Mitrotti, Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR): El año pasado surgió el G8, una iniciativa que busca el trabajo coordinado de las instituciones que atienden poblaciones vulnerables. Esta articulación se inició con un proyecto piloto en Corinto, Cauca y en

Cali, Valle del Cauca, en el que participaron la ACR, la unidad de víctimas, la unidad de restitución de tierras, la unidad de consolidación territorial, el DPS, la APC, el CMH y el Ministerio para el postconflicto. A través de esta estrategia interinstitucional se busca transformar los territorios para empoderarlos y puedan solucionar sus problemas de manera pacífica. Con esto se ha pensado de manera integral el tema de la construcción de paz que eventualmente servirá como base para el postconflicto.

Sesión de preguntas y respuestas: Surgieron algunas inquietudes con respecto al nivel de articulación del gobierno nacional y los gobiernos regionales frente a la política de reintegración, y los retos que encara la ACR. Con relación a la articulación, se señaló que si bien se viene trabajando conjuntamente con los territorios, aún hay aspectos por mejorar ya que se tiende a creer que la política es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. De otro lado, se advirtió que en efecto no es un proceso perfecto y que persisten desafíos como la estabilidad jurídica en el sentido de no cambiar las reglas del juego cada cierto tiempo a los desmovilizados, la apertura de espacios productivos y de empleabilidad, la carencia de participación política, gestión de intereses públicos colectivos, la defensa de los derechos de los desmovilizados, la generación de modelos atractivos para los mandos medios y comandantes, y el fortalecimiento de los vínculos con las autoridades locales para evitar que con la llegada de nuevos gobernantes se cambien los procesos.

Otra pregunta apuntó al tipo de contexto en el que se está llevando a cabo la política de reintegración en Colombia. Sobre eso se dijo que se está construyendo el postconflicto en medio del conflicto pero sin que aún se haya logrado consolidar la paz porque la transformación estructural de todos los problemas es complejo: solo un acuerdo que ponga fin al conflicto permitirá resolverlos. Igualmente se indagó sobre el enfoque de género de la política de reintegración, por lo que se explicó que se trabaja en el trato diferencial tanto de mujeres como de los hombres, con el fin de “resignificar su género roto por la guerra pero sin victimizarlos”.

Se dijo además que el tema de género es un eje transversal de las políticas de las entidades que conforman el G8, destacándose especialmente el trabajo de la Unidad de Víctimas, que cuenta con herramientas como: mesas de participación de víctimas y una mesa nacional de víctimas con paridad de hombres y mujeres; reparación colectiva donde las comunidades escogen a sus representantes y se obliga que haya mujeres; cifras desagregadas por género; programa de atención especial a víctimas de violencia sexual; mecanismos de acceso preferencial a restitución de tierras, y 10 procesos de reparación colectiva con organizaciones de base conformadas por mujeres. El CMH también ha aportado con la realización de tres investigaciones sobre mujeres y la preparación de un informe sobre violencia sexual.

Construyendo paz desde los territorios

Alcides Robles, Director de Gobierno y Asuntos Legislativos de la Federación Nacional de Departamentos: Explicó que la Federación monitorea y hace seguimiento a las principales problemáticas de los 32 departamentos que componen el país, asociadas a la falta de vías de comunicación, inexistencia de espacios de participación, minería ilegal, pobreza y criminalidad organizada, entre otras. Todas estas cuestiones propician conflictividades sociales que requieren de un tratamiento especial y es allí cuando la Federación juega un rol fundamental en el diagnóstico y tratamiento de las necesidades de las regiones. De hecho, se viene impulsando en el

Congreso de la República una iniciativa para destinar recursos que financien el trabajo de la Federación en las zonas más apartadas del país.

Luis Alberto Villegas, Director Ejecutivo de Vallenpaz: Este proyecto tiene como misión contribuir al logro de la paz promoviendo el desarrollo integral de las comunidades rurales en el suroccidente del país. Está en 27 municipios de Nariño, Cauca y el Valle del Cauca, donde el tejido social ha sido afectado por el conflicto armado desatando condiciones de pobreza extrema, lo que ha traído cultivos ilícitos, presencia de grupos armados y el desplazamiento forzado de las comunidades. La idea de promover el desarrollo rural integral de los territorios tiene que ver con la construcción de capacidades para víctimas, victimarios y comunidad en general que ha resistido el conflicto. Con esto se ha logrado un círculo virtuoso de construcción de paz que ha logrado que se acaben los desplazamientos y que las familias tengan alrededor de 1.500 dólares mensuales de ingresos.

Un ejemplo visible de los logros de VallenPaz es la experiencia de La Abadía, municipio del Valle del Cauca donde varias familias pudieron acceder a la tierra asentándose en una finca de 283 hectáreas. El proceso logró generar ingresos a las familias así como otros actores, ayudó a mejorar las vías de comunicación, la construcción de un centro de cosecha y post-cosecha y la realización de un acuerdo para el uso del agua entre las comunidades. Además se hizo una renovación ecológica, y se desarrolló un proyecto productivo con lulo, hortalizas, tomates de árbol y aguacates. Hoy en día el proyecto es sostenible, se están produciendo cerca de 8 toneladas de frutas y hortalizas, generando ingresos y permitiendo a las familias beneficiadas tener una vida digna.

María Patricia Giraldo, Alcaldesa del municipio de San Carlos, Antioquia: La mandataria compartió con los participantes la experiencia de su municipio que pasó de ser uno de los principales focos del conflicto armado a un escenario de paz y reconciliación, ejemplo para el país. Destacó que éste es un proceso liderado por las mujeres y que el municipio hoy vive en situación de postconflicto porque no hay presencia de grupos armados ilegales. Los factores que ayudaron a la pacificación fueron: el arraigo de la población con el territorio, la articulación institucional que ha permitido llevar la oferta del Estado a las víctimas, y la ayuda de personas en proceso de reintegración en la creación y acompañamiento de escenarios de participación y convivencia. Según Giraldo, muchas de estas personas no solo han dado muestras de perdón sino que tienen proyectos productivos sostenibles, otros son comerciantes, otros estudiantes, muchos han podido acceder a vivienda y hoy permanecen en el territorio porque poco a poco se ha logrado satisfacer sus necesidades básicas y se les ha ayudado a construir un proyecto de vida.

Como lecciones aprendidas, la alcaldesa resaltó: (i) el liderazgo del gobernante que es el encargado de atender las necesidades de la población y de tomar las decisiones en su beneficio, (ii) dada la escasez de dinero, es indispensable la gestión eficaz de recursos ante organismos nacionales, internacionales y la empresa privada, y (iii) promover procesos de construcción de memoria. La alcaldesa finalizó diciendo que hay una amenaza ante la posibilidad de que no se le dé continuidad a los procesos que se vienen adelantando, de cara al proceso electoral que se avecina. En este sentido, es crucial que se entienda que la paz debe ir acompañada del compromiso y las acciones de los gobernantes.

Felipe Montoya, Asesor de paz de la Alcaldía de Cali: Habló de su experiencia en la construcción de paz desde la alcaldía de Cali, una de las ciudades más violentas con cerca de 162.000 víctimas pero también, uno de los centros urbanos con el mayor número de personas en proceso de

reintegración. Destacó el trabajo que viene haciendo la ACR en este frente, la necesidad de aprender de las lecciones que han dejado más de diez años del proceso de reintegración y advirtió que uno de los principales retos tiene que ver con la disposición de la población en general frente a la reconciliación. Por ejemplo, contó que en la mesa de víctimas, cuando se enteraron que habían trabajado con población desmovilizada, empezaron a exigir su renuncia argumentando que les generaba desconfianza.

A esto se suma, según él, que muy pocos alcaldes se están preparando para el tema del postconflicto, empezando por el mismo alcalde de Cali, quien al principio de su administración, pensaba que ese escenario sería perjudicial porque iba a llegar más gente a la ciudad que podría generar problemas. En definitiva, según Montoya, la paz está en las regiones, por eso es tan importante que las instituciones nacionales trabajen con las autoridades locales de la mano, para así preparar los territorios para el postconflicto.

Sesión de preguntas y respuestas: Se preguntó por las dinámicas sociales post desplazamiento forzado en San Carlos, frente a lo cual la alcaldesa dijo que a pesar del impacto de la guerra, el 60% de los desplazados se asentaron en Medellín, donde se creó una asociación que permitió conservar los lazos sociales y que al final facilitó el retorno. Sin embargo, advirtió que gran parte de la población desplazada eran niños que luego se volvieron jóvenes y no regresaron. “Los que lo hicieron llegaron con una cultura diferente”.

Al director de Vallenpaz se le preguntó por el involucramiento de las comunidades receptoras y la gestión comercial de los productos, aspectos que aclaró señalando que en el programa han logrado trabajar conjuntamente desmovilizados, desplazados y campesinos de varias zonas del país, y que los productos son comercializados en almacenes de cadena. Esto lo complementó diciendo que la finca de la Abadía se compró con un crédito del Banco Agrario (70%), la donación de una empresa (20%) y el aporte de las 36 familias que hacen parte del proyecto de la Abadía (10%). El valor total fue de 1 millón de dólares, lo que permitió pagarle jornales a los campesinos durante los primeros dos años, mientras el proyecto generaba utilidades. A partir de ahí se ha buscado el balance entre los costos de producción con los precios de venta para pagar el crédito al banco.

Otra pregunta se orientó al impacto de los cambios de gobierno sobre los programas de reintegración. Sobre esto se dijo que existe un alto riesgo de que con la llegada de nuevos alcaldes y gobernadores se trunquen o acaben los esfuerzos que se han venido impulsando, y que evitar esto dependerá, en gran parte, de la estrategia de comunicación y pedagogía que se realice en el marco del proceso de paz. “Muchas autoridades aún desconocen su rol y responsabilidades para el postconflicto”.

Asimismo, se indagó sobre la reacción de los grupos armados ilegales ante las iniciativas de reintegración emprendidas localmente. Frente a esto, se dijo que si bien en contextos urbanos como es el caso de Cali se padecen fenómenos de reclutamiento, los diferentes programas han sido bien recibidos, situación similar a la de San Carlos, donde no solo hubo aceptación sino empoderamiento de la comunidad con respaldo de la Fuerza Pública, lo que permitió que los grupos ilegales se fueran alejando. En el caso de Vallenpaz, al principio hubo contacto directo con los grupos armados pero luego de socializar los programas, el empoderamiento de las comunidades y la aceptación de estos actores, los grupos fueron alejándose.

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Esther MwemaShimba, Oficina de comunicaciones de la Unidad de Implementación del programa de DDR en la República Democrática del Congo (RDC): La participante compartió la experiencia de su país en materia de DDR, resaltando el carácter descentralizado del programa y las ventajas de la articulación entre los gobiernos locales y el gobierno nacional. Asimismo, se refirió al impacto positivo de las campañas de sensibilización con los grupos armados, comunidades y autoridades por medio de estrategias eficaces de comunicación directa y clara en condiciones de igualdad.

Dentro de los principales avances y lecciones, Shimba señaló: 1) trabajar directamente con los desmovilizados evitando intermediaciones; 2) tener paciencia y comprender los contextos; e 3) incorporar, con base en el modelo colombiano, un esquema de acompañamiento y construcción de ciudadanía. Shimba contó que en los próximos meses se planea incorporar un componente de acompañamiento psicosocial antes de la formación, y que se tiene prevista una nueva fase del programa con periodos de formación de seis meses, así como un enfoque asociativo que integre a desmovilizados y sus comunidades para compartir capacidades y métodos de vida.

Cándida Parada, Procuradora Adjunta Defensa de la Familia Mediación y Adopción, Procuraduría General de la República de El Salvador: Luego de hacer una breve descripción del perfil poblacional de El Salvador (56% es menor de 30 años con problemas como la violencia, la pobreza, el bajo nivel de infraestructura, fragmentación comunitaria y alta desconfianza en el Estado), señaló que desde la Procuraduría no se atiende directamente a los desmovilizados, sino que protegen los derechos de la familia y los de la población en general, labor que desarrolla a través de programas de la Unidad de mediación y resolución de conflictos.

En esta unidad se atienden problemas de conflictos familiares, patrimoniales y vecinales. Este último focalizado en temas de intolerancia, de basuras y de parqueo, entre otros. Poco a poco, estos problemas fueron exigiendo una atención comunitaria, por lo que se acercaron al PNUD para la construcción de un modelo comunitario de mediación. En este sentido, se ha construido un modelo en mediación comunitaria en 18 alcaldías y de mediación escolar en 42 escuelas. La Procuraduría hace alianzas con las autoridades locales para formar mediadores comunitarios y promotores de convivencia que salen de la comunidad. En total se han formado 200 mediadores comunitarios con 90 horas de capacitación acreditados por la Procuraduría.

Dentro de las principales lecciones sobresalen: lo importante no es calificar los conflictos como buenos ni malos sino enseñar cómo resolverlos eficientemente; es necesario trabajar con y en la comunidad; no se pueden copiar modelos diseñados en otros países, más si usan buenas prácticas. Como reto para el programa y para la seguridad del país, señaló la existencia de 70.000 pandilleros y 500.000 familias que los apoyan.

Sesión de preguntas y respuestas: Cornelis Steeken, uno de los asistentes y ex miembro de la Misión de Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL), intervino para señalar que una de las grandes lecciones de ese caso para Colombia es que luego de la desmovilización del FNML y la salida del organismo multilateral, el Estado nunca llegó a los territorios y esto favoreció la proliferación de las pandillas. Según Steeken, no basta con la presencia de la Fuerza Pública, también es indispensable la movilización institucional y de la sociedad en general. Con respecto al tema de las pandillas en El Salvador, se indagó si se ha pensado en abordar el tema desde la lucha contra las drogas, sobre lo cual se señaló que si bien un cambio en la estrategia antinarcóticos puede

contribuir a reducir la amenaza criminal, es improbable que se asuma una postura de legalización desde el gobierno, y que el punto clave es abordar la problemática de manera integral y desde sus causas objetivas en el entorno familiar y comunitario.

Otra pregunta apuntó al papel de las redes de tráfico de Coltán como incentivo perverso para que las personas abandonen el proceso de DDR en la RDC. Frente a esto se dijo que en efecto hay evidencia de que muchos excombatientes han salido del programa para unirse a redes criminales asociadas al mineral, especialmente en las regiones del este del país donde no se ha aplicado el programa, y que por eso uno de los objetivos de la nueva fase consiste en ampliar su alcance.

PRODUCTIVIDAD

Carlos Castro, Coordinador de la Oficina Regional del Eje Cafetero (ACR): La inclusión de un componente productivo dentro del proceso de reintegración, parte del hecho de que los excombatientes son personas en situación de vulnerabilidad que pueden convertirse en agentes de desarrollo insertados en el sector productivo formal, lo cual plantea un gran desafío en la medida en que no cuentan con los conocimientos ni las habilidades para desenvolverse correctamente en un entorno laboral y así ejercer su civilidad. Por esta razón se buscó mejorar las capacidades y competencias de las personas en proceso de reintegración durante al menos 400 horas para que puedan vincularse a una empresa y generar ingresos en la legalidad y de manera sostenida. Esto se logra enfocando la acción en dos ejes: por un lado la **empleabilidad** referida a la formación para el trabajo, la vinculación a empresas públicas o privadas y el acompañamiento a las empresas, y por otro el **emprendimiento** referido al apoyo brindado para la creación de unidades de negocio.

A nivel de empleabilidad, la ACR ha aprendido la importancia de garantizar la sostenibilidad de las personas en proceso de reintegración en las empresas, haciendo énfasis en el entorno laboral (compañeros) para evitar la estigmatización, así como en la preparación de los excombatientes con base en las necesidades del mercado. A nivel de emprendimiento, la ACR viene brindando apoyo para la estructuración de unidades de negocio de personas con vocación para atender necesidades específicas del entorno productivo, pero con desafíos importantes, por ejemplo, en lo rural donde hay pocas ofertas de empleo y poca sostenibilidad.

En la región del eje cafetero se ha logrado concretar alianzas entre empresas con necesidades en el sector agropecuario y de confecciones, en los que hay déficit de mano de obra y donde se han vinculado varias personas en procesos de reintegración previa preparación y formación.

Eje de empleabilidad

Lina María Álvarez, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI): Se refirió a dos experiencias de unidades productiva lideradas por desmovilizados y apoyadas directamente por la ANDI. El primer ejemplo es el programa de “Soldadores de la paz” en el que se capacitó a 17 personas para que fueran soldadores con uso de alta tecnología en el sector hidrocarburos en Santander. Estas personas, con el acompañamiento de la ACR, la Fundación ANDI y el SENA, lograron realizar una unidad productiva que es subcontratada por las industrias de hidrocarburos de la región. El segundo ejemplo está relacionado con el sector de confecciones en el eje cafetero.

En este caso lo que se quiere es capacitar a 1.500 personas en sus territorios, con el apoyo de la ACR, la Fundación ANDI, el DPS y el SENA.

Juan Pablo Ortegón, Ejetexco (empresario): Este empresario local de calzado habló sobre su experiencia con personas en proceso de reintegración que se vincularon a su compañía. Explicó que ante la falta de mano de obra en ese sector productivo decidió acudir a ellos sin pensar en su condición sino guiado más por su voluntad, preparación y capacidades. También lo motivó la posibilidad de ayudar a esas personas a olvidar los legados de la guerra y a romper los estigmas. Finalizó diciendo que hasta ahora ha tenido 23 participantes con resultados satisfactorios y sobre todo muy gratificantes porque ha podido ver un cambio importante en la forma en como se adaptan y se desenvuelven en su entorno laboral.

Mónica Sánchez, UNIFORMAR (empresaria): UNIFORMAR es una de las empresas afiliadas a la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) que ha venido vinculando personas en proceso de reintegración desde hace cinco años. El balance de esta experiencia ha sido ampliamente documentado y ha servido para generar guías y “cajas de herramientas” con lineamientos útiles para incentivar a otras empresas involucradas en la cadena de valor del sector, a participar en el proceso de reintegración económica de desmovilizados.

Como hechos destacables señaló que en la empresa trabajan tanto víctimas (especialmente indígenas) como victimarios. En principio eran personas muy tímidas y hoy han logrado desarrollar habilidades especiales para desenvolverse cómodamente en la sociedad. Sánchez contó que muchos de los reintegrados han aprovechado su paso por la compañía para mejorar sus capacidades y de esa forma vincularse a empresas más grandes.

Natalia Salazar, Directora del Grupo de Relaciones Internacionales de la ACR: Se han identificado tres retos en la dimensión productiva del proceso de reintegración: (i) altos niveles de estigmatización ya sea por parte de los compañeros de trabajo como de los gerentes de las empresas que al enterarse de la condición de excombatientes, los expulsan, (ii) creencia de los empresarios que la reintegración es una responsabilidad exclusiva del Estado y (iii) falta de interés en el proceso de reintegración porque no se conoce el rol activo que debe jugarse en la política. Para abordar estas cuestiones se desarrolló una estrategia de corresponsabilidad que comprende cuatro elementos: (i) socialización y validación de la política con el sector privado y entidades públicas, (ii) alianzas tradicionales con el sector privado (iii) alianzas técnicas de cooperación para compartir experiencias y (iv) alianzas interinstitucionales con gobiernos locales.

Adicionalmente se han creado mecanismos que trascienden la lógica de la empleabilidad para ampliar la oferta de vinculación de personas en proceso de reintegración. Dentro de las alternativas sobresalen: el apoyo a la reintegración comunitaria a escenarios de reconciliación, el servicio social, el financiamiento de programas de prevención del reclutamiento (“mambrú no va a la guerra”), el voluntariado, la proveduría que consiste en que las empresas subcontraten servicios con unidades de negocio de desmovilizados, y la formación a la medida para atender solicitudes específicas de empresas con posibilidad de vinculación laboral formal.

Sesión de preguntas y respuestas: Se preguntó por los incentivos de los empresarios para vincular desmovilizados, lo cuales se resumen en el interés por contribuir a la des-estigmatización de esas personas, a formalizar su situación laboral y a aprovechar al máximo sus capacidades. Ahora bien, se insistió es que debe trabajarse en modelos combinados porque no todos quieren ser empleados

y/o empresarios y es allí donde debe haber un esfuerzo para garantizar la demanda de su productos para evitar frustraciones.

Al preguntar por los niveles de empleabilidad en el sector privado se dijo que al principio hubo mucha reticencia del sector, por lo que el Estado tuvo que tomar la iniciativa y empezar a vincular laboralmente desmovilizados para servir de referente a las empresas. Otra pregunta apuntó a la existencia de alianzas con las universidades para vincular desmovilizados, algo que si bien no se ha hecho, si se ha avanzado en alianzas con el SENA para capacitaciones para el trabajo, y con las universidades privadas, en el marco de la estrategia “Trascender”, donde han realizado charlas informativas con las universidades para dar a conocer la política de reintegración. Además hay un convenio con el ICETEX⁶ para que los desmovilizados puedan acceder a créditos educativos.

También surgieron inquietudes sobre beneficios tributarios a las empresas que vinculen desmovilizados y estrategias diferenciadas de acuerdo a los sectores productivos. Frente a lo primero se señaló que si bien no hay incentivos fiscales por este tipo de aporte, el gobierno sí tiene otros mecanismos como la Ley de Primer Empleo, que se extienden no solo a población desmovilizada sino a otras personas. Con respecto al segundo aspecto, se dijo que la ACR no cuenta con estrategias por sector económico, pero que en algunos casos se trabaja conjuntamente con las empresas en la definición de planes de acción específicos según sus necesidades.

Otras preguntas abordaron aspectos como la existencia de amenazas a la ACR por no proveer trabajo, el nivel salarial de los desmovilizados y los procesos sindicales. Por un lado se dijo que la ACR cuenta con profesionales reintegradores que se encargan de explicar en los hogares de paz los beneficios de reintegración para evitar descontentos. También se aclaró que la vinculación o no al mercado laboral depende en gran parte del compromiso de cada participante en la ruta de reintegración y no de la ACR. Con respecto a los salarios se explicó que al igual que cualquier trabajador promedio, los desmovilizados reciben un salario mínimo legal con sus respectivas prestaciones, y que generalmente los desmovilizados no buscan imponer su voluntad a través de sindicatos porque ven la reintegración como una segunda oportunidad.

Eje de emprendimiento

Mario Fernando y Martha Milena, quienes terminaron el proceso de reintegración y son propietarios de una empresa de confecciones de jeans (CONFIFUTURO): Estos dos excombatientes contaron que se conocieron en el grupo armado, se hicieron pareja y luego de que nació su hijo decidieron desmovilizarse debido al peligro que corrían y a las ganas de darle un mejor futuro al menor. Luego hablaron de cómo su paso por la ACR les permitió reincorporarse exitosamente a la vida civil con un nuevo estilo de vida cerca de su familia y con nuevas capacidades para la generación autónoma y sostenible de ingresos. Sobre esto resaltaron la utilidad del acompañamiento psicosocial en la ruta de reintegración, las capacitaciones en el SENA y el capital semilla entregado por la ACR, con lo cual pudieron formar su propia empresa de confecciones llamada CONFIFUTURO.

⁶El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en de Exterior, es la entidad del Estado que se encarga de promover el acceso a la educación superior a través del otorgamiento de créditos educativos a la población con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico.

Contaron como poco a poco se han ido posicionando en el mercado como proveedores de empresas más grandes, lo que los hace sentir muy satisfechos aunque reconocen que ha sido una tarea difícil. Señalaron además que ninguno de sus empleados conoce sobre su pasado porque prefieren pensar en el presente y mirar al futuro. También comentaron que mientras no sea necesario tampoco le contarán a su hijo sobre su historia pasada.

Se les preguntó si sentían odio por sus comandantes y ellos contestaron que en un principio sí, pero hoy esperan que algún día quienes fueron sus comandantes tomen la decisión de salirse del grupo y que los empresarios no los estigmaticen.

Visita de campo a la Escuela-Taller de Calzado y Confección: Los participantes de la gira pudieron conocer de primera mano un programa de formación para el trabajo en Pereira, en el marco de una alianza estratégica con la academia, el sector privado y el gobierno local. Se explicó que el programa tiene como objetivo capacitar, bajo el modelo “aprender haciendo”⁷, a personas en proceso de reintegración y poblaciones en situación de vulnerabilidad para, por un lado, atender la demanda de mano de obra calificada de los sectores de calzado, marroquinería y costura especializada de la región, y por otro, desarrollar capacidades que les permita generar ingresos o crear unidades de negocio.

Allí los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar con el equipo del taller que no solo incluye desmovilizados sino también migrantes, desplazados y personas de la comunidad, lo cual ha permitido generar procesos exitosos de reconciliación y resocialización. Además pudieron hacer algunas preguntas que giraron en torno a la contribución a la economía, su percepción del proceso y el destino de sus productos, a lo que los mismos protagonistas respondieron que sienten que están ayudando a dinamizar el sector productivo de las confecciones, que el programa es una oportunidad para hacer empresa y que parte de la producción de zapatos es comprada por la Alcaldía de Pereira para donarla después a niños y niñas en las zonas más pobres de la ciudad.

Visitas de campo a fincas cafeteras en Anserma, Caldas y Santa Rosa de Cabal, Risaralda: En estos municipios, los participantes de la gira conocieron la experiencia de dos personas que culminaron exitosamente el proceso de reintegración y hoy son emprendedores. Ellos supieron beneficiarse de los programas de capacitación, de las ayudas económicas mensuales y del capital semilla entregado por la ACR para adquirir su propia finca donde producen, procesan y comercializan café.

En esta visita de campo se dio un espacio para que los participantes recorrieran las fincas y pudieran interrogar a sus dueños sobre su experiencia en el grupo armado y en el proceso de reintegración. Frente a las inquietudes, respondieron diciendo que su paso por el conflicto fue doloroso y que el interés por ser alguien útil para la sociedad los llevó a salirse, decisión que no fue fácil pero que pudieron manejar al permanecer en el campo, que era su entorno natural. Sin embargo, uno de ellos (en Anserma) señaló que no ha abandonado sus convicciones e ideales políticos y sociales que sigue y seguirá defendiendo pero ahora desde la legalidad, es decir, sin armas. Esta persona habló de los esfuerzos que hizo para comprar las tierras, de las ayudas económicas suministradas por la ACR para materializar su proyecto productivo y de los pocos beneficios que recibe de otras agencias del gobierno para financiar su actividad. Según dijo, hoy la

⁷ Esta herramienta pedagógica permite que las personas sean formadas en su lugar de trabajo aprovechando mejor la curva de aprendizaje que en condiciones normales genera sobrecostos asumidos generalmente por los empleadores.

finca tiene 11 mil palos de café, los cuales producen suficiente grano para garantizar el sustento diario de toda su familia.

RURALIDAD

Esneyder Cortés, Director Programático de Reintegración de la ACR: A pesar de que el 75% de los municipios de Colombia son rurales y que el 32% de la población vive en el campo, es en estas zonas donde se concentran las mayores brechas económicas y sociales, lo cual hace que los entornos urbanos sean más atractivos para realizar un proyecto de vida. En la ACR se cree que las áreas rurales brindan grandes oportunidades para la reintegración social y económica y que por eso es necesario cambiar los imaginarios tradicionales que tienden a relegar las zonas del campo y sus habitantes. Para esto es importante reconocer que las zonas rurales no son solo para la producción de alimentos, sino también espacios recreativos e industriales que dan cuenta de su integralidad, la cual puede ser utilizada para potenciar la reintegración de los excombatientes.

Para hacer más atractivo el campo necesitamos intervenir el entorno rural. Los desmovilizados hoy en día están concentrados en los entornos urbanos. Los buscan para capacitarse y después retornar con más capacidades a los entornos rurales. Algunas estrategias desarrolladas por la ACR para mejorar los espacios rurales son: entrenar en zonas urbanas potenciando capacidades para que puedan ser aprovechadas en los entornos rurales; generar acciones que favorezcan el entorno rural y, facilitar el proceso de reintegración en lo rural. La política hay que adaptarla a estos entornos y se deben diversificar las oportunidades del campo más allá de la actividad agropecuaria. El ecoturismo, por ejemplo, necesita de capacitación especial en el entorno rural.

Alfonso Prada, Director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): Explicó que el SENA es una institución estatal con una función económica asociada a la formación gratuita para el trabajo, a la empleabilidad rápida y directa de población vulnerable y económicamente frágil, y a la generación de mano de obra calificada, productividad y competitividad para la sociedad.

La acción del SENA se focaliza en la población pobre que habita en zonas alejadas donde la oferta educativa privada, en el nivel técnico y tecnológico, no llega y también en la población reintegrada de grupos armados ilegales. Este último grupo es atendido en el marco de un convenio con la ACR que se encarga de hacer acompañamiento social inicial para luego remitirlos al SENA, donde inician un programa de formación para el trabajo. Prada señaló que el SENA se encarga de promover con los empresarios con los que mantiene alianzas, la vinculación laboral de esas personas a través de dos vías: la agencia pública de empleo y el fondo de emprendimiento.

Prada también informó que en 2014, junto con la ACR, fueron atendidas 16.000 personas en proceso de reintegración. Así mismo dijo que la institución cuenta con gran capacidad instalada y una amplia oferta de formación agropecuaria, agro empresarial y agroindustrial para recibir eventualmente a desmovilizados de las FARC.

Mónica de Greiff, Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB): La CCB cumple, entre otras, una función de promoción del emprendimiento y fortalecimiento empresarial. Aprovechando la experiencia de la Cámara en este campo, la ACR acudió en su ayuda para la búsqueda de empresas que quisieran contratar desmovilizados. La Cámara entendió que para responder a esto, primero debía vincular personas desmovilizadas y luego invitar a sus afiliados. Pese a la reticencia inicial de algunos vicepresidentes de la entidad, se lograron abrir varios cupos

en diferentes cargos, el problema es que los postulados no tenían ni la experiencia ni la preparación necesaria. Para solucionar esto, la Cámara buscó abogados para encontrar la mejor salida a la contratación de excombatientes. Hoy la entidad tiene más de 60 personas reintegradas contratadas sin ningún problema de estigmatización. Adicionalmente, también asesora 254 unidades productivas de excombatientes para la formalización y sostenibilidad de su empresa.

Recientemente, la CCB hizo una encuesta en la que se preguntó a más de 500 empresarios si estaban dispuestos a recibir excombatientes y si tenían algún programa para el postconflicto. El 55% dijeron que estaban dispuestos a aceptarlos y a generar un programa con reintegrados. Muchos de ellos dijeron que no lo harían en sus empresas, pero que tal vez sí en sus cadenas de proveedores o comprando sus productos.

Luis Fernando Vélez, Director del Centro de Estudios de la Cultura Agropecuaria-CECAPANACA: Aprovechando la infraestructura y capacidad instalada de PANACA con más de 15 años de experiencia, se creó el CECA, un institución educativa acreditada que ofrece programas académicos a personas interesadas en trabajar en el campo. Junto a entidades como el SENA y a la ACR se diseñó un proyecto de formación y capacitación a la medida de 13 semanas, dirigido a actores del conflicto, víctimas, miembros de las Fuerzas Militares y heridos en combate. El proyecto tiene tres características: (i) se basa en la filosofía del “aprender haciendo” con el fin de mejorar la productividad del campo, (ii) pasan por seis unidades productivas (ganadería, agronomía, porcicultura, especies menores, granja auto sostenible y equinos), y (iii) los estudiantes viven en el parque, lo cual permite la interacción entre diferentes grupos poblacionales sin estigmatización.

Luego de pasar por cada unidad (una por semana), los estudiantes tienen la posibilidad de especializarse en una de ellas y al finalizar reciben un certificado como técnico-práctico agropecuario, lo que les permite vincularse al mercado laboral formal. El programa no solo se incorpora el componente de empleabilidad sino también el elemento de emprendimiento e innovación con 54 horas de capacitación. Hoy, este programa es ejemplo de cómo el sector privado puede contribuir a la construcción de la paz.

Sesión de preguntas y respuestas: Surgió una inquietud con respecto al nivel de articulación entre el SENA y los gobiernos locales, a lo que se respondió que hay coordinación territorial completa a través de dos mecanismos: por un lado una junta directiva nacional en la que participan el SENA, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Comercio, donde se definen los lineamientos de transformación productiva a los que se ajusta el servicio de aprendizaje. Y por otro, 117 centros de formación municipales cada uno con un consejo directivo que involucra a las autoridades locales, donde se tienen mesas sectoriales, redes de conocimiento, relacionamiento empresarial a través de la agencia pública de empleo, y donde se hace deliberación de contenidos y caracterizaciones económicas de la región. Es a partir de estas instancias y guiados por los principios de calidad, pertinencia y cobertura, que se identifican los requerimientos productivos de las regiones para crear programas y abrir centros de formación.

Igualmente se formularon interrogantes sobre el tratamiento por parte del SENA a los excombatientes analfabetas y el financiamiento de los programas. En cuanto a la población que no lee ni escribe se dijo que el servicio cuenta con programas de alfabetización que buscan desarrollar un talento para el trabajo y es complementado con sesiones de lecto-escritura básica, como primer paso para luego iniciar un proceso más profundo de formación. Con respecto a la

administración de los recursos, se reiteró que los programas ofrecidos por el SENA son gratuitos y se explicó que tienen dos fuentes de financiamiento esencialmente tributarias: los aportes a la parafiscalidad y los impuestos a las utilidades de las empresas (correspondientes al 1,4%).

Otras preguntas se orientaron a los recursos para el financiamiento del CECAPANACA y el compromiso de la empresa privada con el proceso de reintegración. Sobre el financiamiento del programa educativo de PANACA, se aclaró que no se reciben dineros públicos, que la empresa tienen un programa de responsabilidad social corporativa a través de Fundapanaca, una ONG dentro del grupo que asume el 20% del costo de operación del programa, y que los otros recursos se reciben de la cooperación internacional, de organizaciones como OIM y USAID.

Con respecto al apoyo del empresariado a la reintegración se señaló que en una reciente encuesta liderada por la CCB, el 55% de los empresarios están dispuestos a emplear personas reintegradas lo cual demuestra que hay voluntad desde el sector privado con la construcción de paz, pero también se resaltó que esto va más allá de la empleabilidad y que se busca ayudar a fortalecer la cadena de proveedores de las empresas creadas por desmovilizados.

Lucas Uribe, Asesor de la Dirección Programática de Reintegración de la ACR: Se refirió al modelo de reintegración en un “ambiente controlado”, con el que se busca hacer una intervención intensiva en varios aspectos de la vida de los excombatientes como la formación para el trabajo y la atención psicosocial, con el fin de reducir sus niveles de ansiedad y fortalecer su confianza. Como resultado de la implementación de este modelo, que contó con el apoyo de USAID, OIM y Fundapanaca, las personas en proceso de reintegración pasaron de un estado de indecisión y falta de liderazgo a uno de interacción y colaboración.

Esta intervención se hizo en tres etapas: 1) trabajo de contención y expresión fuerte para que los excombatientes lograran manifestar sus ansiedades y miedos; 2) fase de caracterización para saber y estructurar el plan de trabajo que cada uno de ellos podría tener; y 3) preparación para reducir los miedos después de tres meses de trabajo en estos espacios controlados.

Las principales lecciones fueron: 1) un modelo intensivo como estos puede reducir el tiempo de reintegración; 2) los desmovilizados cambiaron la manera en cómo se relacionaban y disminuyeron significativamente sus sentimientos de ansiedad; 3) la calidad humana de los profesionales reintegradores es fundamental para el éxito del modelo; 4) es bueno contar con un pedagogo para nivelar las formaciones educativas; 5) es importante potenciar los liderazgos sociales para que puedan tener éxito con sus proyectos productivos; 6) es definitivo que el sector privado y público se vinculen a este tipo de iniciativas para que los excombatientes puedan tener mayores certezas de su vinculación laboral después de terminar sus procesos de reintegración en ambientes controlados.

Camilo Potes, Coordinador del Programa de DDR de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM): Recordó que la OIM ha sido socio estratégico del gobierno en el diseño y la implementación del programa de reintegración, como es el caso del CECAPANACA, sobre la base de la innovación como eje para responder eficazmente a la coyuntura y a los contextos. En Colombia estos programas avanzan en medio del conflicto con ofertas altamente atractivas y rentables desde la ilegalidad, por lo que se hace necesario crear alternativas legales innovadoras que compitan y permitan superarlas.

Un ejemplo de innovación impulsado por OIM tiene que ver con la introducción del concepto de reintegración temprana en entornos controlados, que incluye acciones en educación y atención psicosocial, lo cual se materializa en el programa de PANACA. Para consolidar este proceso, la OIM ha servido de facilitador para la articulación del sector privado (PANACA), la academia (SENA) y el sector público (ACR). Desde el sector privado, el aporte es crucial en la medida en que a través de la marca de la empresa, que en este caso está bien posicionada, se puede vincular a otros empresarios al proceso de reintegración y de esa forma generar mano de obra calificada y sectores económicos competitivos.

Jorge Ballen, Fundador y Presidente del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (PANACA): Para lograr que la reintegración en el mundo rural sea exitosa, es necesario entender las especificidades de ese contexto y a partir de la identificación de las necesidades más apremiantes se deben diseñar programas educativos. La idea es responder eficazmente a esos requerimientos por medio de cursos que enseñen, en este caso a los desmovilizados, a desarrollar capacidades para poder desenvolverse adecuadamente en el campo, objetivo del CECAPANACA.

Al principio se abrieron dos programas pilotos de formación para el trabajo, uno de 10 y otro de 40 personas. De este último grupo se encontró que el 60% eran menores de edad al momento de ingresar, y el 95% se habían querido volar a los 15 días, al mes o al año de pertenecer en el programa. PANACA decidió entonces contar a los empleados de la empresa quiénes eran estos empleados porque en su opinión es necesario que lo sepan. Los pilotos se hicieron inicialmente de manera confidencial y luego se socializó a 66 empresarios del sector agropecuario, lo cual permitió que sus percepciones frente a los desmovilizados cambiaran.

Sesión de preguntas y respuestas: Se formularon algunos interrogantes sobre el manejo de los vínculos con la familia de las personas que participan en este tipo de programas en entornos controlados y sobre la posibilidad de que estas iniciativas se repliquen en contextos muy marcados por expresiones ilegales. Con respecto al primer aspecto, se señaló que el modelo se ha pensado más allá del ambiente controlado para buscar la estabilización de las relaciones del excombatiente con su familia y con la comunidad, generando los espacios para propiciar reencuentros ya sea donde están las personas en proceso de reintegración o donde están sus familias, y a través de medios virtuales. Con respecto a la ampliación de estos programas a otras regiones, se reiteró las dificultades institucionales que hay para ofrecer alternativas económicas legales atractivas a la población desmovilizada y en ese sentido, la importancia de desarrollar opciones innovadoras pero también diferenciadas en función de las regiones que permitan competir con las ofertas ilegales que en la mayoría de los casos son muy rentables, algo en lo que ya se trabaja en Caquetá.

Otras preguntas apuntaron a conocer la posición de la iglesia en este tipo de iniciativas de reintegración y los impactos de estos programas de formación para el trabajo. Sobre el rol de la iglesia se comentó que, con base en varias recomendaciones, se han logrado acercamientos con la iglesia católica y otras denominaciones para la promoción de la reconciliación en sus homilias. Con relación al impacto del programa se señaló que al ser una suerte de laboratorio social, el éxito muchas veces depende de la calidad humana de las personas que hacen el acompañamiento.

Una última pregunta se refirió al grado de apropiación de estos programas, sobre lo cual se dijo que el 95% del financiamiento de estas iniciativas está a cargo del gobierno y que los aportes de cooperación internacional son mínimos en comparación con los esfuerzos económicos del

gobierno para sostener estos programas. La contribución de la comunidad internacional, de ONG, y organizaciones multilaterales, está más enfocada hacia la cooperación técnica.

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Grevisse Ditend Yav, Director General del Programa Nacional de DDR de la República Democrática del Congo (RDC): El profesor señaló que el Congo ha realizado unidades agrícolas por medio de asociaciones de desmovilizados, en el que el programa dota de todas las herramientas y capacidades para la sostenibilidad de la unidad productiva en la ruralidad. No obstante, esta experiencia, si bien ha tenido fundamentalmente tres retos: 1) la diferencia de la reintegración en el medio rural y el urbano, 2) la formación de empleo y 3) la economía del conflicto.

Sobre la primera, la RDC encontró que la reintegración en el medio rural es sólida y duradera. No obstante, señaló que en estos espacios hay muchas precariedades que atender. Sobre la segunda, destacó que la formación para el trabajo con enfoque rural es definitivo para la sostenibilidad de los proyectos rurales, con inclusión de la familia que también hace parte del proyecto. Finalmente, sobre la economía del conflicto, el profesor señaló que para facilitar esta reintegración hay que solucionar los conflictos por el acceso y uso de la tierra. Los granjeros, por ejemplo, acaban con los cultivos y algunas comunidades invaden terrenos porque no tienen tierras. En el Congo hay que resolver el problema de las tierras para lograr facilitar la reintegración en los medios rurales.

Finalmente, el profesor Ditend comentó que para una mejor sostenibilidad económica de los desmovilizados es recomendable que ellos hagan productos con valor agregado en vez de diversificar la oferta. Esto puede generar mejores ganancias y puede ser más prometedor en la estabilidad económica de los excombatientes.

Yadaira Orsini, Programa de Asuntos Corporativos y Construcción de Paz de International Alert, United Kingdom: Este programa (International Alert) parte del hecho de que en contextos de conflicto armado, las empresas que allí operan están llamadas a jugar un rol determinante en la transformación del entorno, por lo que es necesario guiarlas en la forma de hacerlo.

En casos como el de Colombia, donde la organización hace presencia desde 1999 trabajando con empresas del sector extractivo, energético y de agroindustria, por lo general este tema se aborda desde la mitigación de riesgos y la acción sin daño, pero muy poco en aportes para la sociedad.

Para cambiar esto, el programa busca incentivar a las empresas a re-enfocar lo que ya hacen hacia la productividad y la construcción de paz, es decir, sin crear nada nuevo y sin imponer nada. En ese sentido tienen varias opciones de apoyo: (i) oportunidades de vinculación de excombatientes en los eslabones bajos de la cadena de valor, (ii) apadrinar empresas pequeñas de desmovilizados, (iii) entregar capital semilla y hacer alianzas para infraestructura, (iv) apoyar programas de desarrollo y paz (PDP), y (v) generar espacios de reconciliación.

Dentro de los principales retos que persisten están: tener en cuenta tipo, tamaño y estructura de las empresas; conocer la historia de la empresa: si ha sido muy golpeada por el conflicto o no porque eso determina su apoyo o resistencia a la construcción de paz; hacer pedagogía para construcción de paz antes de hablar de reintegración; los temores de las empresas por inseguridad y el acceso a información por parte de los desmovilizados; priorizar en atención a comunidades en áreas de influencia dejando de lado a la población reintegrada y, desconocimiento del tema.

Sesión de preguntas y respuestas: Se formuló una pregunta sobre el retorno a las inversiones que hacen las empresas sobre los excombatientes. Frente a esto se señaló que en muchos casos, especialmente en las grandes empresas, no hay conciencia sobre el tema de la paz y es por eso que el programa del International Alert, busca dar alternativas de apoyoreorientando sus estrategias para apoyar a los reintegrados sin que tengan que hacer mayores esfuerzos fiscales ni operativos.

A esto se agregó que la construcción de paz es también una cuestión que compete a empresas multinacionales que en muchos casos, como sucede en la RDC, ignoran que a través de su operación, por ejemplo, la extracción de recursos como el coltán terminan alimentando el conflicto, y que la mejor forma de contribuir a la paz es generando empleo y garantizando la demanda de los productos de las unidades de negocio de los excombatientes.

Otro aspecto que se abordó tiene que ver con el rol de los donantes multilaterales e inversores internacionales, los cuales deben entender su rol en la construcción de paz para garantizar la canalización y gestión eficaz de los recursos que aportan a las empresas privadas locales. De ahí la necesidad de tener en cuenta todos los niveles de ayuda para la paz y que en la medida de lo posible, se procure la alienación para la ejecución de ayudas para el postconflicto.

Se preguntó también por la veracidad de los temores de las empresas frente a las personas reintegradas, a lo que se respondió que así como se han presentado casos en los que en efecto existen riesgos de seguridad, en otros se trata de imaginarios y prejuicios. Frente a esto es importante comprender la posición de las empresas ante la posibilidad de vincular desmovilizados en el sector de seguridad o vincular reintegrados con familiares en grupos armados, lo cual eventualmente puede generar riesgos. Es necesario romper paradigmas y para eso se debe empezar hablando de construcción de paz para ir familiarizando a las empresas con estos procesos y eliminar los prejuicios. Además, se advirtió sobre la importancia de entender esto como un proceso de doble vía, en el sentido de que los desmovilizados también tienen prejuicios frente a las empresas. Un avance importante es reconocer dichos prejuicios para luego trabajar sobre ellos.

RECONCILIACIÓN

Rocío Gutiérrez, Coordinadora de la Oficina Regional del Valle del Cauca (ACR): Uno de los principales objetivos de la política de reintegración es la generación de espacios de reconciliación y para esto contempla tres modelos de intervención: (i) la reintegración comunitaria que busca empoderar a las comunidades del proceso de la reintegración, lo que permite promover la visión de que los desmovilizados son un factor de oportunidad de cambio y de reconstrucción del tejido social; (ii) el servicio social con el que se busca que durante 80 horas los desmovilizados ayuden a atender alguna necesidad en comunidades vulnerables y afectadas por el conflicto, previa concertación y priorización con la comunidad, y (iii) el trabajo en la ruta asociado a la dimensión ciudadana que pretende no solo lograr que los desmovilizados se conviertan en sujetos de derechos y deberes, sino que retribuyan a sus comunidades llevando a cabo acciones en su beneficio como jornadas de limpieza.

Durante los 12 años de implementación de la política se han podido identificar varias lecciones en términos de generación de escenarios de reconciliación: (i) para convertir a la comunidad en aliado del proceso es necesario mostrar resultados concretos, (ii) el involucramiento con la

comunidad ayuda a que esta se empodere del proceso pero también a que disminuya la estigmatización, (iii) el acompañamiento a la comunidad es crucial para generar confianza y para que dejen de ver a los desmovilizados como extraños que hacen daño, y más bien como agentes de cambio que ayudan a la comunidad, (iv) la reintegración comunitaria permite re-significar los componentes de la guerra al contemplar acciones simbólicas de aceptación de responsabilidad, perdón, no repetición, reconciliación y memoria, y (v) es fundamental sensibilizar a las comunidades frente al proceso y trabajar concertadamente con estas.

Carolina Castillo, Coordinadora de la Oficina Regional de Caquetá (ACR): Comenzó resaltando algunos factores de contexto del Caquetá que resultan claves para entender la estrategia de reconciliación de este centro de servicio. Sobre esto señala que la Unidad de Víctimas y la ACR entendieron que debían trabajar juntos para no seguir dividiendo a las familias entre víctimas y victimarios. Con esta postura, hay mayor facilidad para acordar estrategias con la comunidad que con otras instituciones.

La ACR implementa distintas estrategias para promover estos espacios de reconciliación. Una es la acción de servicio social con el apoyo de las comunidades, especialmente los líderes de las JAC, que propician espacios de reconciliación. Otra estrategia es la aplicación del modelo de reintegración comunitaria que promueve la convivencia entre comunidades y excombatientes. Las estrategias buscan primero conocer las necesidades de las comunidades para atender estas necesidades en conjunto con los excombatientes. Finalmente, una tercera estrategia, alianza de la Fundación para la Reconciliación y Pastoral Social, ha sido crear un centro de la reconciliación que busca promover procesos de perdón para reducir las motivaciones que puede dejar la violencia, como sentimientos de venganza y rencor entre las comunidades.

León Valencia, Director Ejecutivo de la Fundación Paz y Reconciliación: Resaltó la importancia de entender qué piensa y qué quieren las FARC para la reconciliación y en ese sentido señaló algunos elementos que surgieron de un encuentro reciente que sostuvo con los delegados de paz de ese grupo en La Habana. Según Valencia, la guerrilla quiere salir a la vida civil pero tienen temor por los sentimientos de odio y rabia que alberga la sociedad. No piensan desmovilizarse sino que planean “movilizarse” política y socialmente en los territorios donde históricamente han operado y quieren hacerlo colectivamente con las comunidades que allí habitan. Esto es lo que han buscado en la mesa de conversaciones a través de demandas como las circunscripciones especiales de paz, las zonas de reserva campesina y los programas de desarrollo alternativo. De acuerdo con Valencia, esto marca un punto de quiebre con las negociaciones de los 90s y la década del 2000, que derivaron en desmovilizaciones dirigidas por el Estado para dispersar y dismantelar estructuras.

El experto también señaló que tanto el gobierno como la guerrilla deben cambiar su discurso de deslegitimación del otro, por uno que legitime, para generar confianza entre la opinión pública. Finalizó diciendo que si bien es necesario exigir a la guerrilla que cambie sus ideas y métodos para defenderlas, se les debe dar una nueva oportunidad, por lo que es necesario exigir a las élites políticas que se “desmovilicen” y hagan un gran pacto nacional por la reconciliación.

Monseñor Héctor Fabio Henao, Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social: La Pastoral Social ha acompañado procesos que son llamados iniciativas locales de paz. Estas son comunidades de base que construyen ejercicios para la atención de distintos tipos de conflictos

que no solo se centran en el conflicto armado. En este ejercicio se ha venido reflexionando sobre el concepto de reconciliación a partir de cuatro dilemas.

El primer tiene que ver con el concepto de seguridad. Para algunos, según Monseñor, significa mantener un ejercicio militar y policial, pero para otros, puede ser reconstruir el tejido social. Pastoral Social aboga por el segundo. El segundo dilema es si se debe entender la reconciliación como un proceso de corto o largo plazo. Entre esta tensión aparecen numerosas cosas a señalar. Una de ellas es que la reconciliación debe ser un paso para construir un futuro deseado en el contexto de una sociedad en paz. Es por esto que la reconciliación significa ir hacia adelante, pero siempre hay una tendencia a regresar al pasado.

El tercer dilema es sobre las percepciones y el lugar que estas juegan en las actitudes de las personas. La construcción de la paz tiene que enganchar las emociones y creencias, así como la racionalidad para que se pueda contribuir a una paz de largo plazo. El cuarto dilema es la tensión que hay entre reconciliación y perdón. Según Monseñor, el perdón tiene en cuenta el arrepentimiento, pero esto no es necesario para construir la reconciliación. Según él, estas cuestiones hay que hacerlas a nivel comunitario porque es la única manera que hay para tocar creencias y actitudes de las personas.

Carolina Suarez, Asesora de la Dirección de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV): Se refirió al trabajo coordinado que la Unidad viene adelantando con la ACR en términos de las garantías de no repetición y en ese sentido, de la importancia de hacerle entender a la víctima que debe trabajar con su victimario para que se genere confianza, reconciliación y para que los abusos no vuelvan a ocurrir. La Unidad reconoce que las garantías de no repetición dependen de una gran oferta institucional y que por lo tanto debe haber una efectiva articulación, que en el caso de la ACR se da a partir de la convergencia entre las rutas de atención y reparación integral y la ruta de la reintegración en varios territorios, y de la necesidad de que haya armonías entre los procesos en el marco de la reconciliación.

A partir de este esfuerzo conjunto se han identificado experiencias de reconciliación dirigidas a proyectos productivos, construcción de memoria, y a proyectos políticos en los que, por ejemplo, personas en proceso de reintegración integran mesas de víctimas, lo cual en principio es paradójico pero entendible, si se tiene en cuenta que en muchos casos quienes fueron victimarios en algún momento también fueron víctimas al ser reclutados forzosamente. En otros casos, como las desapariciones forzadas o violencia sexual, la reconciliación puede dificultarse por la persistencia de odio y rencor contra el victimario e incluso contra el Estado, aunque hay ejemplos excepcionales como el municipio de San Carlos, en Antioquia, donde las víctimas y los victimarios se unieron espontáneamente para buscar los cadáveres de sus familiares.

Marc De Beaufort, creador y productor de la campaña "Soy Capaz": Explicó que la campaña "Soy Capaz" surgió con la idea de lograr que la sociedad colombiana se interesara por la paz, un tema en el que desconfía por que ha sido instrumentalizado políticamente y que en cierta forma es ajeno en lugares donde vivir en guerra es normal. La solución a este problema fue llevar un mensaje a través de un actor distinto al gobierno y legítimo ante la sociedad como es el empresariado, sin que fuera publicitario. Así, se logró unir a 180 empresas de diferentes sectores para que empaquetaran sus productos de blanco con frases alusivas a la construcción de paz.

Más adelante se unió la iglesia, algunos deportistas y artistas con resultados positivos reflejados en cerca de 25 millones de visitas al sitio web de la campaña en un mes. Esto demostró que el mensaje estaba llegando y gustando. Sin embargo, hubo ataques por parte de sectores opositores al proceso de paz y dificultades con los empresarios. A pesar de esto se logró enviar un mensaje de cinco pasos para construir la paz: reconocer que hay un problema, que todos somos en parte responsables, ponerse en los zapatos del otro, entender que en medio de la diversidad hay puntos de convergencia y que hay que hacer por la construcción de paz. La campaña se seguirá trabajando con ajustes y se le pedirá a las empresas que se sumen a la oferta, más allá del cambio de un empaque.

Sesión de preguntas y respuestas: En la sesión de preguntas se priorizaron algunas directamente a León Valencia sobre la refrendación de los acuerdos, quien aseveró que ese tema y el de justicia son los más duros para tratar con las FARC. Para la guerrilla, la Asamblea Constituyente es la mejor garantía para que los acuerdos se realicen, sin embargo, en opinión de Valencia, esta es una posición muy inocente, por lo que es mejor hacer una consulta popular.

Adicionalmente se preguntó sobre la reinserción económica de las FARC. Sobre esto se dijo que los miembros de esta guerrilla se imaginan contribuyendo en la reconstrucción de las carreteras y construyendo pequeñas hidroeléctricas en veredas que, según ellos, son cosas que ya hacen, por eso quieren conformar empresas donde el Estado los contrate. Sin embargo, para que esto sea sostenible necesitan que las mismas empresas los ayuden.

Luego se indagó sobre las iniciativas existentes con respecto al tema de la verdad. Sobre esto la representante de la Unidad de Víctimas afirmó que en el proceso de Justicia y Paz se busca, precisamente, una cierta evidencia de verdad judicial. Por otro lado, sobre la memoria histórica como una manera de satisfacer el derecho a la verdad, dijo que han sido aliados los antagonistas, los militares, las empresas y las víctimas para la contribución de la misma. Aun así se debe seguir trabajando para reconstruir toda la verdad que falta. La representante de la ACR del Caquetá dijo que en la dimensión de ciudadanía, la institución sensibiliza a los excombatientes sobre la importancia de la verdad y que ellos son los que tienen que contribuir con sus testimonios en los Acuerdos de la Verdad.

Martha Izquierdo de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP): Presentó el proyecto de reintegración comunitaria liderado conjuntamente por la UTP y la ACR en la comuna Villa Santana de Pereira, que abarca los barrios Tokio, El Remanso, Las Brisas y el Danubio. Allí se buscó vencer los temores de las comunidades frente a la presencia de desmovilizados por medio de la animación sociocultural. Esta metodología exalta el empoderamiento y la construcción de realidades a partir de experiencias en comunidad. Para lograrlo, primero se identificaron los actores estratégicos, se creó una mesa de trabajo y se incentivó el diálogo para buscar alternativas de superación de la vulnerabilidad. Luego sí se invitó a las personas en proceso de reintegración.

A continuación se realizó un diagnóstico por medio de animación sociocultural que permitió identificar como las principales problemáticas: el microtráfico, disputa por el territorio, falta de control social, ausencia de entornos de protección, falta de oportunidades laborales y falta de capacidad de la comunidad para consolidar escenarios de paz. Para abordar estos flagelos se desarrolló un plan de formación a través de una escuela de reconciliación con tres módulos para personas en proceso de reintegración, la comunidad y las instituciones. Después de esto se diseñó el proyecto como tal, tomando los resultados de la escuela y generando insumos para que

desde el arte las organizaciones replicaran el ejercicio. Los resultados de estas jornadas fueron presentados a la comunidad como una acción simbólica para generar orgullo, confianza y apoyo. Finalmente se hizo una retroalimentación y se documentaron los logros y las lecciones aprendidas. Se destacó que a través de este proyecto se está ayudando en la prevención del reclutamiento por medio de acciones lúdicas y artísticas que hacen que los niños, niñas y adolescentes entiendan que pertenecen a un lugar donde están protegidos, evitando que se vayan a grupos armados ilegales.

Sesión de preguntas y respuestas: Se preguntó acerca del rol de los líderes comunitarios a lo que se respondió que el proyecto de la ACR y la UTP buscó desde el comienzo potencializar los mecanismos de participación e integración existentes, en este caso con cuatro organizaciones de base (una de ellas fue la Fundación Colombia Humana), involucrando a las personas en proceso de reintegración como líderes de estos procesos. Asimismo, se resaltó que el propósito no ha sido intervenir y luego salir, sino generar impacto real y dar continuidad a las acciones comunitarias.

Brigadier General William Salamanca, Policía Nacional: El Brigadier señaló que la Policía Nacional en su política de prevención al reclutamiento busca tener espacios de paz y convivencia. Actualmente hay 5.000 Policías que trabajan en esta política con una formación especial. La Policía trabaja bajo tres estrategias: prevención, vigilancia y control, e investigación criminal. En el componente de prevención la Policía va a lugares de alto riesgo de reclutamiento bajo dos programas: “Abre tus ojos” y “Basta, aquí soy libre: jóvenes a lo bien”.

En el caso de la estrategia de control y vigilancia, la Policía creó una estrategia con los colegios para conocer la situación de los niños. Esta es una red de educadores que por comunicación interna le informan a la Policía sobre los riesgos de los niños, y así la Policía interviene de manera oportuna. Hay también una estrategia para convertir a niños en gestores de convivencia escolar. Estos gestores promueven el compañerismo, el respeto por la diferencia, la capacidad de mediación y la promoción de liderazgo para el uso positivo del tiempo libre.

Finalmente, la estrategia de investigación criminal consiste en que la Policía en alianza con otras instituciones, restablece por medio del ICBF los derechos de los desvinculados. Establece quiénes son los responsables del reclutamiento, recolecta los elementos de prueba y realiza operaciones de captura de los responsables.

La Policía también se encarga de temas relacionados con desmovilizados. Sobre esto hay tres tareas: 1) estrategias para prevenir, orientar y acompañar personas en proceso de reintegración que estén en riesgo de seguridad, 2) coordinar con autoridades competentes el diseño de medidas de protección para excombatientes y 3) coordinar, asesorar y ejecutar en alianza con la ACR la reintegración social de las personas desmovilizadas. Actualmente hay 31 policías que son enlace con los grupos territoriales de la ACR para coordinar las rutas de atención de seguridad para las personas desmovilizadas que estén en riesgo. La Policía realiza un acompañamiento a los funcionarios de la ACR, asesora a los grupos territoriales en temas de prevención y judicialización, y facilita la comunicación entre la ACR y la Policía.

Sesión de preguntas y respuestas: Se indagó si hoy se conoce sobre participación de miembros militares y policiales en grupos armados al margen de la ley. Sobre esto, el Brigadier General resaltó que en su momento sí sucedió pero que hoy en día no es una realidad. Se preguntó también si los policías que trabajan con los niños portan armas, si existía Policía comunitaria y cuáles son las consecuencias cuando los menores cometen delitos. Sobre esto el Brigadier

respondió que los 5.000 policías de infancia no portan armas pero cuando hay comisión de delitos se procede a realizar una estrategia de capturas de los responsables. Cuando los menores de edad son los responsables, el sistema judicial colombiano tiene un marco especial de atención que busca la formación de cultura de la legalidad y la no repetición de los delitos.

Finalmente se preguntó cuál era el balance entre los que se desmovilizan y los que son reclutados por organizaciones criminales, es decir, cuántos son desmovilizados y cuántos son reclutados. En este caso, Joshua Mitrotti respondió que ese balance es un gran desafío porque es muy difícil saber exactamente cuántas personas realmente se vinculan a la criminalidad. No obstante, revisando el caso de las BACRIM, la Policía ha capturado 7.000 integrantes de estas bandas y solo el 10% eran antiguos excombatientes. Esto quiere decir que el 90%, es decir 6.300, son nuevos hombres y mujeres en la criminalidad.

Visita de campo a la sede de la Fundación Infancias 2/32, Pereira: Los participantes de la gira vieron de cerca un programa de servicio social ejecutado de manera conjunta entre la ACR y la Fundación Infancias que atiende a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad en algunas comunidades de Pereira. Allí, varias personas en proceso de reintegración, en cumplimiento del mandato establecido por la ley 1424 de 2010, cumplen con al menos 80 horas de servicio comunitario para poder acceder a beneficios penales. Algunas de las actividades en las que han participado tienen que ver con la utilización de botellas plásticas recicladas para la construcción de materas ornamentales y en la redacción de cartas a víctimas de secuestro.

EJERCICIO EFECTIVO DE LA CIUDADANÍA

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

María Ofelia Navarrete, ex miembro de la guerrilla del Frente Nacional Farabundo (FMLN) Martí de El Salvador: Navarrete afirmó que las condiciones de desmovilización que se están dando en Colombia son muy distintas a las de El Salvador.

Según la excombatiente, en 1989 las direcciones se sentaron a conversar durante dos años y acordaron la paz el 16 de enero 1992. Después de la firma, las tropas de ambas partes, las guerrillas y los militares, se concentraron en distintos puntos del país y la desmovilización se dio espaciada por contingentes hasta que todos se desmovilizaron. Sobre la reinserción, Navarrete resaltó que es un tema importante que pasa por la reconciliación. En este caso, la reconciliación tiene directa relación con las emociones y el reconocimiento del otro.

John Jairo Osorio, desmovilizado que culminó el proceso de reintegración de la ACR: Habló de su decisión de desmovilizarse, la cual describió como un gran reto no solo porque implicaba que el grupo se convertía desde ese momento en su enemigo, sino también por la incertidumbre y temor de entregarse a quienes antes había combatido. Cuando llegó al “hogar de paz” su percepción cambió y empezó a sentir confianza en el proceso de reintegración, que en su caso duró 4 años.

Tras culminar satisfactoriamente todas las etapas de la ruta, logró vincularse a la ACR como promotor de reintegración, posición que le ha permitido atender a ex compañeros del grupo armado. Hoy es multiplicador del proceso a través de iniciativas de trabajo con la comunidad.

Además participa en varios proyectos con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) para que cientos de familias permanezcan en el campo y desarrollen proyectos productivos.

Roberto Cañas, ex miembro de la guerrilla del Frente Nacional Farabundo Martí (FMLN) de El Salvador:Cañas comenzó con algunas consideraciones para su conversación:primero que hay una necesidad de saldar cuentas con pueblos que colaboraron en la paz de ellos; segundo que hay que estar convencido sobre los dividendos de paz; tercero que la paz se hace con justicia, es decir, hay que superar los problemas de pobreza y desigualdad; y finalmente, que la condición *si ne qua non* de la paz es la reconciliación.

Después de estas consideraciones, Cañas señaló que si no hay disposición para superar el pasado es difícil alcanzar la reconciliación. La experiencia salvadoreña muestra que las personas que viven más el conflicto son los que más fácil pueden encontrar procesos de reconciliación. Luego señaló que se debetener en cuenta que las personas en un contexto de guerra sufren problemas psicológicas que hay atender. Esta atención debe buscar la finalización del odio y el deseo de venganza para crear una ampliación reflexiva del pasado y generar una nueva identidad de nación. Especialmente los jóvenes que no vivieron el conflicto necesitan mantener ese vínculo para entender el pasado y comprender el presente. Esto ayuda a no repetir los mismos errores.

Finalmente, Cañas afirmó que hay que cambiar la cultura y las costumbres y esto pasa por la cultura de paz. Las actitudes de represión y coerción tienen que ser superadas con otras que se basen en el diálogo y la negociación. Esto último porque según el panelista las palabras y el lenguaje forman sentidos y contextos, por lo que hay que recrearlos y usarlos de mejor manera para la construcción de paz.

Henry Robinson, ex miembro de la guerrilla del Ejército Republicano Irlandés (IRA):Aunque la guerra en Irlanda terminó con la firma de un acuerdo de paz, el proceso que vino después fue rápido, débil e imperfecto porque no hubo desmovilizaciones, ni programas de reintegración ni espacios para la reconciliación. Las comunidades quedaron aisladas y hasta hoy se sigue lidiando con problemas estructurales que no lograron resolverse llegada la paz.

En su opinión, el caso de Colombia es ejemplar, es claramente distinto a lo que se hizo en Irlanda y definitivamente hay una gran oportunidad para trabajar en la construcción de paz. Una de las principales lecciones que saca de la experiencia colombiana es el papel central que se le ha dado a las víctimas, algo que en su país no se hizo. Desde su perspectiva, para que la paz sea sostenible el proceso debe ser tan integral como sea posible para evitar reincidencia y debe haber un involucramiento muy activo de las víctimas, lo cual implica que haya justicia pero también una alta dosis de verdad porque esas personas tienen derecho a saber que ocurrió.

Sesión de preguntas y respuestas:Se formularon interrogantes con relación a la experiencia de El Salvador e Irlanda en términos de reconciliación y buenas prácticas en reintegración comunitaria. Frente al primer aspecto, se dijo que en El Salvador el hecho de que el actual presidente haya sido guerrillero da cuenta de que el proceso fue exitoso aunque no por eso completo, de hecho, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no se han atendido efectivamente y por eso es necesario que haya un proceso de sanación colectiva. En el caso de Irlanda sucede algo similar, en el sentido de que varios ex comandantes guerrilleros han llegado a ser primeros ministros pero los beneficios a nivel de reconciliación no han ido más allá de la ausencia de guerra. De hecho, se tiene reportes en algunas regiones del rearme de facciones que participaron en el conflicto.

Sobre la reintegración comunitaria, en el caso de El Salvador, se dijo que la reintegración de los combatientes del FMLN se llevó a cabo en las comunidades donde vivían lo cual facilitó su reincorporación porque allí estaban sus familias. A esto se agregó que con los acuerdos de paz no solo debe buscarse el desarme y la transición de los grupos armados a partidos políticos, sino que como resultado de esos pactos deben impulsarse transformaciones estructurales a nivel institucional y social que garanticen la gobernabilidad, y esto supone esfuerzos desde la clase política pero también cambios de actitud y de costumbres que se inician en el hogar y la escuela.

CONTRIBUCIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL A LA REINTEGRACIÓN

Alejandro Gamboa, Director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC): El trabajo coordinado entre la APC y la ACR permite evidenciar las ventajas de la cooperación internacional en toda su dimensión. Por medio de los recursos de los donantes se ha podido complementar y consolidar un modelo de atención a desmovilizados en medio del conflicto que resulta muy atractivo para países en situaciones similares y que ha dejado al menos tres grandes prácticas que han permitido una guía del *know how* de Colombia en la materia: (i) el proceso de reintegración como tal, (ii) el esquema de atención psicosocial y (iii) el esquema de reintegración comunitaria. Estos tres modelos han sido ampliamente documentados y compartidos con más de 60 países con el sistema de cooperación sur-sur y cooperación triangular.

Bajo esta perspectiva, el papel de la APC consiste en alinear a los diferentes socios en función de la construcción de institucionalidad para la construcción de paz, con el fin de que los esfuerzos no sean dispersos y no se repitan. A cambio se les da resultados tangibles que demuestran que sus aportes son efectivos en ese propósito. Como retos hacia adelante, Gamboa señaló la necesidad de trabajar con los donantes en fórmulas que pongan lo aprendido al servicio del postconflicto, hacer mayores esfuerzos para evitar duplicidad de iniciativas y lograr mayor niveles de articulación.

Peter Natiello, Director de la Misión de USAID en Colombia: Los cooperadores internacionales son una porción muy minoritaria en la política de reintegración. El éxito de este programa de reintegración en Colombia es que el Estado se ha apropiado del desafío. Los cooperadores solo aportan con recursos, capital intelectual y experiencias internacionales.

¿Qué ha hecho USAID con la ACR? Apoyó la construcción del sistema de información SAME que es la base datos de los desmovilizados, y adicionalmente, ha dado asistencia técnica adiferentes partes de la ruta y al modelo de servicio comunitario y acciones de servicio social.

La ACR es una institución con cultura de excelencia y autocrítica; su trabajo lo evalúan con cifras, procedimientos rigurosos y con base a lecciones y aprendizajes. No obstante, habrían tres temas que falta trabajar más a fondo: seguridad, estigmatización y alianzas con otros actores.

Marie Andersson de Frutos, Embajadora de Suecia en Colombia: Los ejes de la cooperación bilateral entre Suecia y Colombia son: la seguridad y la paz, los derechos humanos y la gobernabilidad. Bajo esta perspectiva, Suecia viene apoyando a Colombia en distintos procesos de construcción de paz a través, por ejemplo, del financiamiento de la verificación de la MAPP/OEA al proceso de DDR con

los paramilitares, y de la conformación de un fondo para la implementación de la Ley 975/05 de Justicia y Paz.

A partir del trabajo conjunto entre los dos países se han identificado algunas lecciones aprendidas y buenas prácticas: 1) promoción del enfoque de género en el trabajo de la ACR y en general del DDR, 2) construcción de redes territoriales de paz, 3) generación de una visión holística de los temas de DDR, justicia transicional y construcción de paz, y 4) el desarrollo de un enfoque de atención individual y colectiva. Por todo esto, Suecia seguirá comprometida con el apoyo al proceso que adelanta la ACR y hace un llamado para que la experiencia y capacidad instalada de la Agencia se conserve para futuros procesos de reintegración en el país.

Joshua Mitrotti, Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR): La cooperación internacional ha sido fundamental para la transformación del país y la superación de situaciones complejas en términos de seguridad y derechos humanos. Aunque la ayuda representa solo el 7% del costo del programa de reintegración, el aporte ha sido determinante en varios sentidos: primero ha permitido la profundización, innovación y experimentación con grupos poblacionales en ambientes controlados; segundo, profundizar los conocimientos y sistematizar las lecciones, y tercero, construir “puentes invisibles” entre la sociedad del futuro, la de ahora y la más vulnerable.

Colombia en el postconflicto

General (r) Óscar Naranjo, Ministro Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad: Luego de 50 años de un conflicto armado atravesado por múltiples y diversas violencias, el gobierno vio una ventana de oportunidad para iniciar un proceso que permitiera encontrar una salida negociada a la guerra. Dentro de las condiciones que llevaron a tomar esta decisión, están por un lado, una correlación favorable al Estado en términos institucionales y militares, y por otro, una serie de elementos fácticos como la ofensiva militar que permitió debilitar a la guerrilla, el apoyo de la comunidad internacional y de la población local. Este proceso ha partido de una revisión retrospectiva de procesos exitosos y fallidos, y de la participación de excombatientes en cargos públicos.

Esta negociación se caracteriza porque reconoce la existencia de un conflicto armado, se lleva a cabo por fuera de Colombia, no contempla despejes, se basa en el principio de que nada está acordado hasta que todo este acuerdo, plantea la necesidad de que los acuerdos sean refrendados por la población e incluye dentro de la mesa de diálogos a miembros activos de la Fuerza Pública. El proceso además se guía por una agenda temática claramente definida con elementos sustanciales como el reconocimiento del origen rural de las FARC, de la existencia de una brecha entre el mundo rural y el mundo urbano, el impacto humanitario acentuado en el campo, la posibilidad de que la guerrilla transite a la legalidad como movimiento político, el abordaje de las drogas ilícitas como elemento transversal de las violencias, dar garantías de que no habrá paz armada y que los excombatientes serán protegidos para que ejerzan la política (DDR), y la satisfacción de los derechos de las víctimas como centro de las conversaciones.

Con relación a la construcción de paz, denominada genéricamente postconflicto, Naranjo destacó el papel que ha venido cumpliendo la ACR atendiendo a más de 50.000 desmovilizados desde hace 12 años, así como los avances que se han hecho desde el gobierno con la aprobación de la Ley de Víctimas (1448/2011). Para Naranjo, no es conveniente hablar de postconflicto porque ese concepto ancla a la sociedad al pasado, por eso es preferible hablar de construcción de paz lo que

sería un primer pilar de esta nueva realidad. Otro elemento es que haya capacidad de planeación, administración y ejecución para lograr transformaciones efectivas. Como tercer pilar señala la necesidad del cambiar el modelo institucional para que haya gobernanza para la paz, es decir, que las conflictividades sociales se diriman por las vías pacíficas y, finalmente, que haya integridad y transparencia. Como uno de los vectores esenciales para dar origen a esta nueva realidad, Naranjo mencionó el tiempo dividido en tres fases: una de alistamiento (negociación y firma de acuerdos), otra de transición (un plan de respuesta rápida de 12 a 18 meses) y una fase de estabilización (proyectos de mediano y largo alcance).

III. APRENDIZAJES, RETOS Y RECOMENDACIONES FINALES

	¿Cuál es el aprendizaje más importante para compartir? (éxitos y/o retos)	¿Si usted fuera contratado como consultor de la ACR, qué le recomendaría hacer y por qué?
Ruralidad	<ul style="list-style-type: none"> • Interacción y alianzas entre los gobiernos locales, la nación y las personas en proceso de reintegración. • Se ha pensado en la reintegración desde de las regiones. • Se ha pensado en cómo solucionar los problemas de las poblaciones más vulnerables. • La reintegración es más fácil cuando se está en un entorno familiar. • Fortalecer la capacidad de las mujeres reintegradas para tener acceso a créditos. • Promover el arraigo al campo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar un modelo de reintegración que se enfoque en las comunidades. • Seguir promoviendo la reintegración en los ámbitos rurales dado que los escenarios urbanos presentan más dificultades. • Promover la aplicación de un enfoque de género a la formalización de la propiedad de la tierra en las áreas rurales. • Concebir la ruralidad desde la perspectiva de los “clusters” en los que participan varios actores (sector privado, sector público y comunidad), para atender las necesidades básicas de la población. • Ofrecer más alternativas legales que efectivamente compitan con los incentivos ilegales que predominan en las áreas rurales. • Brindar asesoría legal para la formalización de la propiedad de la tierra. • Dado que es posible que muchos desmovilizados de las FARC permanezcan en sus territorios, es necesario considerar planes de acción para responder a sus necesidades inmediatas. • Crear y promover acceso al empleo en el campo. • Fortalecer la atención a las comunidades receptoras. • Incentivar la “culturalización del campo”, es decir, que no solo se intervenga para mejorar la infraestructura sino también para formar a la población en valores, derechos y deberes.
Territorialidad	<ul style="list-style-type: none"> • Focalizar la atención en aquellos territorios donde la violencia se vivió con mayor intensidad. • El uso de lenguaje digno y constructivo y no “confrontativo”. • El nivel de sostenibilidad de la reintegración a nivel local. • Tener en cuenta los efectos colaterales de los esfuerzos de reintegración sobre aquellos territorios que no sean incluidos dentro de las intervenciones. • Contemplar la creación de nuevas instituciones como una Policía rural. • El alto nivel de articulación interinstitucional 	<ul style="list-style-type: none"> • Tener en cuenta las habilidades y destrezas de las personas en procesos de reintegración. • Aumentar el nivel de corresponsabilidad entre el sector privado y el público a nivel local. • Documentar y sistematizar la experiencia nacional de reintegración en los territorios para ofrecerla formalmente a aquellos países que tengan necesidades puntuales en este ámbito. • Ampliar el alcance del programa de reintegración a otras regiones. • Publicitarlo más a nivel internacional. • Fortalecer coordinación con las autoridades locales. • Es necesario que el trabajo de la ACR se

	<p>tanto a nivel público como privado y con las comunidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar otras fuentes de violencia que puedan llegar a tener un impacto directo sobre el proceso de reintegración y la construcción de paz en general. • Procurar por soluciones desde lo local enfatizando en aspectos como la educación, no solo de la población desmovilizada, sino de la población en general a través de la capacitación de formadores que faciliten el proceso de reintegración en los territorios. Esto permitiría multiplicar los beneficios, generar confianza y ayudar a la reconciliación. 	<p>mantenga con o sin acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer el mecanismo G8 pero involucrando a las comunidades para garantizar integralidad en la atención y articulando estas iniciativas con los planes de desarrollo local. • Procurar una mayor participación de las víctimas. • La reintegración de los excombatientes debe hacerse en donde habitaban antes del conflicto. • Alinear las acciones de la macro industria con la política de reintegración dado que tienen un impacto directo sobre los territorios.
<p>Productividad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No es lo mismo desarrollar procesos de reintegración individual que colectivos. Hay que pensar en un nivel masivo, tener en cuenta la motivación política. • Hay que diferenciar sector, tamaño y misión de la empresa para vincularla efectivamente. • Mejorar las capacidades técnicas para mejorar productividad. • Para las próximas giras dar más espacio para visitar las ferias de productivas. • Es importante saber y entender qué es lo que más se produce por región. • Distribución más equitativa de la tierra, darle tierras a los campesinos. • Iniciativas de emprendimiento como escenarios de reconstrucción. • La reintegración individual ha favorecido la reincorporación de los PR. Sin embargo, se debe tener en cuenta cómo será el marco de los desmovilizados colectivos. 	<ul style="list-style-type: none"> • No asistencialismo con los proyectos económicos productivos. Lo importante es la sostenibilidad. • Necesidad de apoyo técnico, económico, inteligencia de mercados, mercadeo (ejemplo de los tenis en bolsas usadas) • Trabajar en el modelo asociativo por ejes, componentes y sectores. La unión hace la fuerza. • Desarrollar la transformación de los productos para obtener mayores valores agregados. • Generar proyectos con enfoque étnico para grupos indígenas. Profundizar el enfoque diferencial. • Fortalecer el vínculo entre reintegrados y empresarios. • Capacitar a personas en proceso de reintegración en proyectos productivos. • Tener siempre en cuenta lo que les gusta para que de esta manera los frutos serán duraderos. El ejemplo es Oscar como empresario. • Ofrecer a los reintegrados que participan en procesos de productividad y formación, un pago y en caso de que ellos saquen los certificados relacionados con la productividad, entregar incentivos, como licencias de conducción, computadoras y maquinaria que los motiven. • Identificar quiénes perfil de emprendedor para que se garantice la sostenibilidad de los negocios. • Dar visibilidad a la labor de la ACR frente a la comunidad en general y frente al país, con el fin de generar un empoderamiento del sector privado en pro de los procesos de reintegración.
<p>Reconciliación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compromiso para implementar acuerdos. • Cooperación con el proceso. • Sin verdad, sin justicia transicional, sin reparación moral y material no hay reconciliación. • Abrir espacios políticos para la oposición. • Reconciliación no es igual que perdón. • Estrategias pedagógicas que familiaricen a la ciudadanía con el proceso de paz y permitan 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar de manera permanente programas de salud mental, estrés post-traumático, cultura de paz y técnicas de resolución de conflictos. • Acercar a diferentes generaciones. • Sistematizar la reconciliación como concepto para desarrollarla en diferentes espacios. Por ejemplo, en el escolar, familiar y comunitario. • La paz requiere de la reconciliación como soporte y esta última no puede obtenerse con impunidad.

	<p>cambiar los imaginarios sobre el tema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprender el derecho del otro. • Consenso nacional en favor de la paz. • Trabajar con los medios de comunicación para combatir la imagen de polarización. • El punto de encuentro de un pueblo debe siempre buscarse, esa es la base para seguir trabajando y construyendo la paz. • La reconciliación es una decisión que debe ir posibilitando el perdón y las alianzas • Si bien es cierto que el perdón es personal, no exime a las organizaciones comprometidas de favorecer escenarios pedagógicos para su comprensión. Este ejercicio compromete a la ACR y a la UARIV. • Diálogo para el alcance de la paz. • La disposición de alcanzar la paz interior en beneficio de una paz nacional. • Campaña de sensibilización pública y masiva de los objetivos de la ACR. 	<p>Lo anterior no supone encarcelar a todos, pero si invita a enmarcar este proceso en términos de justicia restaurativa, balanceando la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluir el enfoque étnico en temas de reconciliación para que nadie se sienta excluido. • Promover la difusión de la información. • Recoger experiencias no institucionales de reconciliación para aprender de estas. • Multiplicarse y avanzar con el trabajo bajo los mismos principios y valores tomando muy en cuenta la idiosincrasia de cada sector: indígena, pobres, mujeres, negros, campesinos y otros. • Completar y complementar el proceso de desmovilización y reintegración. • Sin reconciliación no podemos hacer la reintegración sostenible en el tiempo. • Para poder tener una paz sostenible es indispensable trabajar y hacer énfasis en la reconciliación al interior de las comunidades. • La reintegración también requiere enfoques: étnico, género, los más vulnerables. • Difundir los ejercicios de reconciliación. • Aprovechar las capacidades de las personas en las comunidades dado que esto permite que se integren. • Recoger la experiencia en temas de reconciliación en otros países. • Hacer arreglos en el lenguaje: cambiar el concepto de grupos terroristas y dejar de ver el tema como una lucha entre malos y buenos. • La reconciliación es un proceso que se debe dar de manera progresiva, no se puede querer reconciliar a uno con los otros de manera automática. • Tener en cuenta que cuando las personas en proceso de reintegración llegan a las comunidades se pueden dar dinámicas de competencia: más beneficios a unos que a otros.
--	---	---